



# CONVENTION / ~~TREATY~~ / ~~DECLARATION FOR~~ / ON RESPONSIBLE USE OF SPACE and ~~TERRAIN~~ (C.R.U.S.H.) HOUSING

Acknowledging that the authors of this legal document are ~~unappointed members of civil society~~ / ~~human inhabitants~~ of cities:

The adherers to this Convention,

Considering that ~~property~~ insofar as it is a scarce ~~commodity~~ in relation to the public good<sup>1</sup>, should be addressed according to ~~democratic principles~~<sup>2</sup>;

Recognizing the social economic circumstances that produce both vacancy, and the necessity of occupied spaces;

Considering that the Commercial Vacancy Industry<sup>3</sup> effectively sustains ~~ing~~ rightlessness and reproduces the social-economic circumstances that lead to inequality and limit access to affordable space<sup>4</sup>;

Recognizing that squatting and / or occupation is a form a ~~civil disobedience~~ necessary for the democratic process and therefore should not be criminalized;

Considering that detailed knowledge of public and private real estate development<sup>5</sup> should be publicly accessible to provide for accountability<sup>6</sup>;

Considering that the idea of 'restoration of public order' by the means of eviction should only take place if there is imminent ~~responsible use of space~~; there can be no eviction for vacancy;

This preamble shall not be interpreted contrary to the spirit of the Convention:

Agree to the following:

CONSIDERING THAT HOUSING, AS GRANTED BY THE UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS UNDER THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING, ENTAILS THE PROTECTION FROM FORCED EVICTION, IRRESPECTIVE OF TITLE

CONSIDERING THAT THIS CONVENTION DOES NOT AIM TO DEFINE THE NOTION OF PROPERTY WITH REGARD TO EXCHANGE VALUE

CONSIDERING THAT A COMMUNITY RIGHT TO OCCUPY SHOULD BE ACKNOWLEDGED

THAT SPECIFIC VARYING USE VALUE

CONSIDERING THAT THE USE OF SPACES FOR FINANCIAL ACCUMULATION BASED ON THEIR EXCHANGE-VALUE CANNOT INTERFERE WITH THE USE-VALUE OF SPACES

STIMULATE SPECULATION ON THE VALUE INCREASE OF PROPERTY, WITH THE PROSPECT OF FINANCIAL SECURITIZATION

INEQUALITY, GENTRIFICATION AND LIMIT ACCESS TO AFFORDABLE SPACE

WHO DEFINES AFFORDABLE?

WHICH IN TURN BECOME A NECESSARY PRACTICE OF

FORCED EVICTIONS OR

CLEAR EVIDENCE OF

DEFINING ART. IV

TO ALLOW FOR LOCAL COMMUNITIES TO HAVE THE RIGHT TO CHALLENGE

IS THE OUTCOME OF A COLLECTIVE PROCESS AND DOES NOT AIM TO SUBJECTIFY OR PRODUCE SUBJECTS

REAL ESTATE SECTOR INFLUENCING THE

DEFINED

CONSIDERING THAT THE ENJOYMENT OF RIGHTS WITHIN THIS CONVENTION SHOULD BE SECURED WITHOUT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RACE, COLOUR, SEXUAL ORIENTATION, RELIGION, AGE, ABILITY, NATIONALITY OR MIGRATION STATUS

CONSIDERING THAT THE ENJOYMENT OF RIGHTS WITHIN THIS CONVENTION SHOULD BE SECURED WITHOUT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RACE, COLOUR, SEXUAL ORIENTATION, RELIGION, AGE, ABILITY, NATIONALITY OR MIGRATION STATUS

CONSIDERING THAT HOUSING, AS GRANTED BY THE UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS UNDER THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING, ENTAILS THE PROTECTION FROM FORCED EVICTION, IRRESPECTIVE OF TITLE

1. Intended as a non-excludable and non-rivalrous good: in that others cannot be excluded from it, and that it cannot be made scarce for profit by any individual

2. Should this be fixed? Is the democratic process a blueprint OR a fluid process?

3. Intended as a for-profit industry which takes advantage of low / temp contract wage workers, who otherwise criminalized, or unable to afford current rent-rates, turn to this industry.

4. Definition?

5. Including plans, urban impact assessments, transparency in contract awarding and individuals involved

6. Mechanisms that allow for open public arbitration and contestation must be made available.



Pablo Martínez

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

En las últimas décadas el asunto del territorio y el modo en que el régimen de propiedad ha dominado y articulado las relaciones sociales ha generado conflictos de muy distinta índole a lo largo y ancho del planeta. Hasta tal punto que los intereses especulativos han quedado por encima de las necesidades de cobijo, sustento y convivialidad. Conceptos como «valor de cambio» o «valor de uso» parecen quedar desprovistos de sentido bajo la gubernamentalidad neoliberal de un mundo en el que urge configurar una gramática de los comunes que ponga en el centro la vida y sus formas. Como recientemente recordaba Silvia Federici “el intento neoliberal de subordinar toda forma de vida y conocimiento a la lógica del mercado ha aumentado nuestra conciencia de vivir en un mundo en el que ya tenemos acceso a los mares, los árboles, los animales y nuestros semejantes excepto a través del nexo del dinero... las formas de cooperación social están siendo producidas constantemente también en áreas donde no existían anteriormente como por ejemplo Internet”(2). El viejo concepto de los comunes es ahora de central utilidad para la construcción de nuevas relaciones que, desde un materialismo impregnado por nuevos feminismos y discursos ecologistas, desbordan los límites propios de las tradiciones anarquistas y socialistas para articular alternativas que resistan la desposesión inherente al proceso de acumulación capitalista.

Asuntos como el derecho a la ciudad y a la vivienda, que han atravesado buena parte de la experiencia política en la última década, han sido centrales en el trabajo de Adelita Husni-Bey. Su práctica se despliega en procesos de apertura que se desarrollan en el tiempo y en los que convoca a diversos agentes para articular procesos que desbordan las lógicas consensuales típicas de los procesos colaborativos. Las metodologías de colaboración que aplica provienen de lugares tan dispares como el teatro del oprimido de Augusto Boal o las prácticas feministas de la década de los setenta: desde la exploración del lenguaje para desbaratar el orden legal existente a la encarnación del conflicto para desafiar la representación política imperante.

Adelita Husni-Bey ha llevado a cabo desde 2014 hasta la actualidad diversos proyectos en El Cairo, Utrecht y varias ciudades del Estado español (Móstoles, Madrid y Barcelona) en relación al problema de la vivienda y el territorio bajo el título *Libro blanco: sobre el territorio, la ley y el imaginario*. Una de las partes fundamentales del proyecto consiste en la creación de una convención europea sobre el uso del espacio y que ha venido desarrollando en Los Países Bajos y el Estado español. La Convención es un texto para-legal que fue elaborado entre marzo y mayo de 2015 en los Países Bajos con el apoyo de Casco-Office for Art, Design and Theory en Utrecht, como respuesta al cambio de normativa aplicado en 2010 a la okupación en los Países Bajos, que fue incorporada como actividad delictiva en el Código Penal. Pero la Convención no solo pretende dar respuesta a este problema concreto, sino que arroja una reflexión más amplia sobre el uso del espacio y la falta de viviendas asequibles, la escasez de recursos para los sin papeles, así como el aumento de los alquileres. La Convención considera el espacio un «bien» que no debe ser privatizado o permanecer sin uso con fines especulativos, y enumera los usos en los que la okupación debería estar protegida. Como texto, la Convención es un ejemplo de propuesta de legislación hecha desde abajo. En el texto central de este Focus Adelita Husni-Bey describe el proceso de redacción del texto en los Países Bajos así como las intenciones fundamentales para activar el proceso de escritura en el Estado español, que afecta además a la producción de imaginarios. Esto queda

descrito en *Los espigadores y yo* el diálogo que en el marco del proyecto mantuvieron Husni-Bey con Emilio Santiago Muiño y Ana Méndez de Andes, donde se relata el complejo proceso de redacción de las leyes; desde la voluntad popular hasta su final ejecución hay un largo recorrido: elecciones para elegir Parlamento, redacción en el Congreso, propuesta de enmiendas, Senado que ha de refrendar las leyes... En este sentido, ¿qué imaginarios de lo normativo son capaces de producir estos largos procedimientos? En el caso concreto de la vivienda, un ejemplo reciente acude a nuestra memoria al trazar este proyecto, como es la Iniciativa Legislativa Popular llevada al Congreso de los diputados por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) y que con 1.402.854 firmas de apoyo popular no fue aceptada por el Congreso de los diputados para su tramitación. Pensar quiénes hacen las leyes, a qué intereses responden sus acciones y de qué manera se han configurado, y contestarlo mediante la escritura de un texto, parece algo más que un mero gesto poético y puede convertirse en una relevante herramienta de imaginación política y de empoderamiento. Entre junio y septiembre de 2016 en diversos espacios independientes y centros sociales okupados de Madrid, Móstoles y Barcelona se realizaron reuniones públicas para redactar la versión española del texto, prestando especial atención a la genealogía histórica de la cuestión de la vivienda en España y el consiguiente desarrollo de la legislación. Las reuniones contaron con la participación de artistas, activistas, abogados y diversos agentes implicados en movimientos sociales.

## Notas

1 Este título proviene de la exposición de la artista en CA2M celebrada en diciembre de 2016 y que recogía parte del trabajo desarrollado en Móstoles, Madrid y Barcelona en la primavera y otoño de ese año.

2 Federechi, Silvia. Feminism and the politics of Common in an Era of Primitive Accumulation, *Revolution Point Zero: Housework, Reproduction and Feminist Struggle* (Oakland/New/PM.; Press/ Common Notions, 2012) pp. 138-139 [www.uzbona.org](http://www.uzbona.org)



# CONVENCIÓN SOBRE EL USO del ESPACIO

CONTRA LA FALTA DE VIVIENDAS ASEQUIBLES

CONTRA LA FALTA DE RECURSOS PARA LOS SIN PAPELES

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA OKUPACIÓN

POR UN USO COLECTIVO Y NO ESPECULATIVO DEL ESPACIO URBANO



¡ESCRIBIREMOS LA LEY DEL FUTURO!



Pablo Martínez

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

In recent years the question of territory and the way in which the system of private property dominates and articulates social relations has generated very different conflicts all around the planet. Speculative interests have come to enjoy greater priority than the need for shelter, sustenance and community. Concepts such as “exchange value” and “use value” appear to be stripped of meaning in the context of the neoliberal governance of the world. Has become imperative to establish a grammar of the commons, placing life—in its many forms—at the center. As Silvia Federici recently reminded us: “The neoliberal attempt to subordinate every form of life and knowledge to the logic of the market has heightened our awareness of living in a world in which we no longer have access to seas, trees, animals and our fellow human beings except through the cash nexus... forms of social cooperation are constantly being produced in areas where none previously existed, for example the Internet.” The old concept of the commons has become central in constructing new relations, grounded in a new kind of materialism—saturated with new feminist practice and ecological language—that now moves beyond the limits of anarchist and socialist traditions to articulate alternatives that might resist the dispossession inherent in the process of capitalist accumulation.

Questions such as the right to the city and to housing, which have been present in much of the political experience of the last decade, have been essential in Adelita Husni-Bey's work. Her practice takes the form of processes over time: she invites different actors to link their work in ways that move beyond the typical rules of collaboration. The methodologies of collaboration she applies arise from traditions as varied as Augusto Boal's Theater of the Oppressed to feminist practices from the 1970s, from exploring language in order to undermine the existing legal order to embodying conflicts in order to challenge dominant political representations.

Since 2014 Adelita Husni-Bey has carried out various projects in Cairo, Utrecht and several cities in the Spanish State (Mostoles, Madrid and Barcelona) engaging the problem of housing and territory in the framework of a project called *White Paper: On Land, Law and the Imaginary*. One of the key parts of the project consists in creating a European Convention on the Use of Space, which she has been working on in both the Netherlands and the Spanish State. The Convention is a quasi-legal text developed between March and May of 2015 in the Netherlands with the support of Casco-Office for Art, Design and Theory in Utrecht, as a response to the change in the Dutch law applied to squatting, that now classifies the activity as criminal under the country's Penal Code. The Convention responds not only to this specific problem, but also casts a broader light on the use of space and the lack of affordable housing, the scarcity of resources for those without documentation and the increasing cost of rent. The Convention considers space a “good” which should not be privatized nor be left unused for speculative purposes, and identifies the situations in which squatters should be protected. As a text, the Convention is an example of legislation from below. In the central text of Focus, presented here, Adelita Husni-Bey describes the process of writing the Convention in the Netherlands as well as the efforts to activate a similar writing effort in the Spanish State, and how this process generates new imaginaries. This is described in *The Gleaners and I*, a conversation between Husni-Bey and Emilio Santiago Muiño and Ana Méndez de Andes, in which they relate the whole complex process through which laws are written and established. It is a long



road from popular demand to the moment a law finally comes into effect: elections to choose the Parliament, writing up the bill in Congress, the formal presentation of the bill, its approval by the Senate... what imaginaries of the normative are capable of producing these long procedures? In the specific case of housing, a recent example comes to mind: the Popular Legislative Initiative taken to Congress by the Platform of People Affected by Mortgages (PAH), which had 1,402,854 signatures of support but was not accepted by Congress as a bill. Thinking about who makes laws, whose interests their actions defend, and how this has taken shape, and then responding to the inquiry by writing a text is more than a mere poetic gesture: it might become a valid tool for political imagining and empowerment. Between June and September of 2016 in various independent social spaces and squatted social centers in Madrid, Móstoles and Barcelona public meetings were held to write up the Spanish version of the text, paying special attention to the historical genealogy of housing issues in Spain and the consequent legislation. These meetings brought together artists, activists, lawyers and various actors in social movements.

## Notes

1 This title comes from the artists exhibit in the CA2M in December 2016, which brought together part of her work from Móstoles, Madrid and Barcelona from the spring and fall of the same year.


2 Federichi, Silvia. "Feminism and the Politics of the Common in an Era of Primitive Accumulation", *Revolution Point Zero: Housework, Reproduction and the Feminist Struggle*. PM Press/Common Notions/Autonomea. 2012. pp 138-139. [www.uzbona.org](http://www.uzbona.org)








ENCUENTROS ABIERTOS  
A TODO EL MUNDO. HABRÁ  
ALGO PARA PICAR. NO ES  
NECESARIA EXPERIENCIA  
LEGAL PREVIA. ♥

## ENCUENTROS EN JUNIO:

**Martes 7 de junio: CA2M 18.00-21.00** - Av. Constitución, 23 Móstoles.  Mostoles Central  
sobre el preámbulo y el artículo 1: ¿cuáles son las bases de este documento legal?

**Martes 14 de junio: Rompe el Círculo 18.00-21.00** - Pza del Turia, 2, Móstoles.  Hospital de Móstoles  
Artículo 4: ¿cómo se da forma al derecho, a la ciudad y a la vivienda?

**Martes 21 de junio: Traficantes de Sueños 18.00-21.00** - c/ Duque de Alba, 13, Madrid.  Tirso de Molina  
Artículo 3: ¿quién define los comunes?

**Miércoles 29 de junio: Solar Antonio Grilo 20.30 al cierre** - c/ Antonio Grilo, Madrid.  Plaza España/ Noviciado  
Artículo 2: ¿qué es un criminal, un especulador o un okupa?

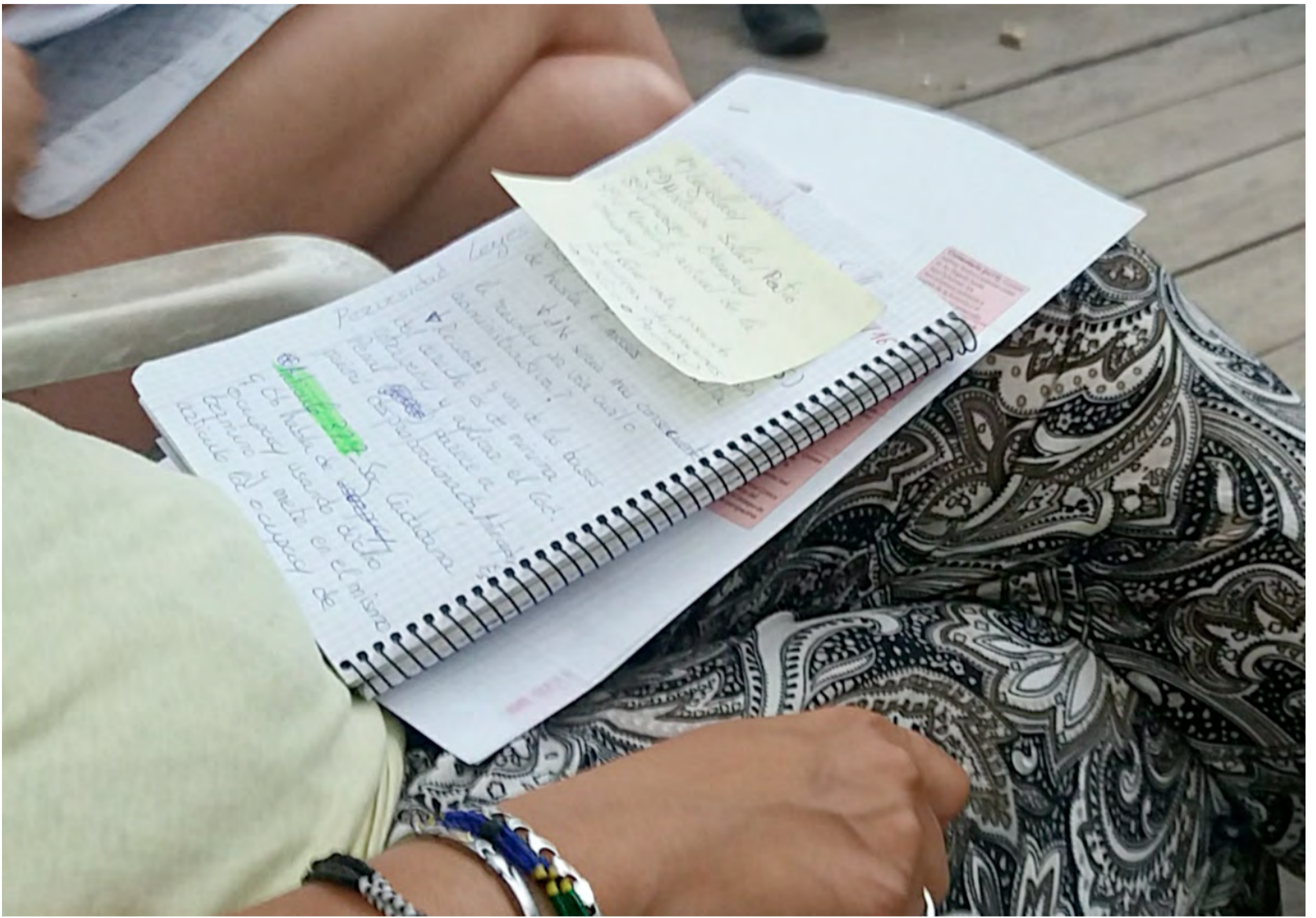
Con la participación de miembros de Legal Sol, No Somos Delito, PAH, Casika...

PRIMERA PARTE DE UNA SERIE DE ENCUENTROS QUE TENDRÁ  
LUGAR ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016 PARA ESCRIBIR  
EL CAPÍTULO ESPAÑOL DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL USO  
DEL ESPACIO (CUS). LA 'CUS' RECLAMA DERECHOS QUE EN  
LA ACTUALIDAD NO SON LEGALES Y ES UN EXPERIMENTO  
LEGISLATIVO CONSTRUÍDO DESDE ABAJO. EL PRIMER CAPÍTULO  
DE LA CONVENCIÓN TUVO LUGAR EN LOS PAÍSES BAJOS EN 2015,  
LAS REUNIONES TRABAJARÁN SOBRE LA VERSIÓN TRADUCIDA DE  
LA CONVENCIÓN CON EL FIN DE ADAPTARLA AL CONTEXTO  
ESPAÑOL.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE:  
[WWW.USEOFSPACECONVENTION.ORG](http://WWW.USEOFSPACECONVENTION.ORG) Y [WWW.CAZM.ORG](http://WWW.CAZM.ORG)

PARA RECIBIR INFORMACIÓN PUNUAL DEL PROYECTO ENVIÁ  
UN CORREO A: [ACTIVIDADES.CAZM@MADRID.ORG](mailto:ACTIVIDADES.CAZM@MADRID.ORG)





## White Paper: On Land, Law and the Imaginary

<http://www.valiz.nl/AdelitaHusni-Bey%E2%80%94WhitePaperonLand,LawandtheImaginary>



# Trabajo de campo

Pensar a fondo la Convención sobre el Uso del Espacio (casi más de) un año después.

Adelita Husni Bey

Investigadora independiente, pedagoga y artista. Brooklyn.

En mayo de 2014, como parte de un encargo de la institución neerlandesa Casco, empecé a trabajar en la Convención sobre el Uso del Espacio (CUS, por sus siglas en inglés). Utilizo la primera persona del singular en tanto que instigadora del proyecto, en un intento por aceptar la responsabilidad, más que la autoría, puesto que la lista de co-colaboradores y co-conspiradores ocuparía varias páginas. Hay mucho que decir sobre la metodología particular utilizada para montar la CUS, así como sobre las complejidades que acarrea el hecho de que la CUS sea al mismo tiempo un documento funcional y un documento producido a través de un marco institucional/artístico; pero, antes de nada, creo que si nunca hubiera oído nada de la CUS, querría averiguar qué es, así que voy a empezar describiendo el espacio paradójico que habita la Convención y de dónde viene.

La Convención sobre el Uso del Espacio es un documento paralegal, en la medida en que emula/roba el lenguaje, el ámbito y la estructura de un documento legal y aspira a ser leído como tal, pero no es un documento legal en la medida en que no procede de una entidad legal reconocida con poderes formales en materia de vivienda. Se redactó “colectivamente”, a través de una serie de encuentros públicos celebrados por todo Países Bajos: los responsables fueron un grupo heterogéneo de personas, así como un pequeño número de ponentes invitados y remunerados, que debatieron sobre la estructura, la función y el lenguaje de los artículos que la componían. La Convención intenta cuestionar e introducir un régimen paralegal sobre lo que se considera en la actualidad propiedad y, por extensión, lo que puede hacer un propietario con su propiedad, en contraposición con los “comunes”. Se basa en la idea de que la propiedad, como “distribución de los derechos sociales”, debe ponerse en cuestión en tanto que resultado del modo inherentemente injusto en el que esos derechos están en la actualidad distribuidos, normalizado en virtud de diversas formas de privilegio heredado y adquirido. Si abordamos el espacio de los comunes como un espacio inalienable que la Convención protege, podemos ver que ésta funciona como herramienta prefigurativa de negación de la reproducción perpetua de la propiedad privada.

## I. Posesión arraigada

Los regímenes modernos de propiedad privada surgen del hondo entrelazamiento entre la apropiación de activos y su “mecanismo distribuidor”: la legislación regulatoria sobre bienes raíces. La propiedad y los cercamientos de tierras aparecieron mediante la expansión de los derechos de los siervos sobre la tierra en torno a los siglos V y VII, cuando, de acuerdo con Silvia Federici (2010), se impusieron los derechos de uso y las formas fundamentales de regulación agraria como medio para contener y apaciguar las rebeliones campesinas (p. 36). En palabras de Federici, “desde el punto de vista de los cambios que introdujo en la relación amo-esclavo, el aspecto más importante de la servidumbre fue la concesión, a los siervos, del acceso directo a los medios de su reproducción” (FEDERICI, 2010, p. 37). Las relaciones



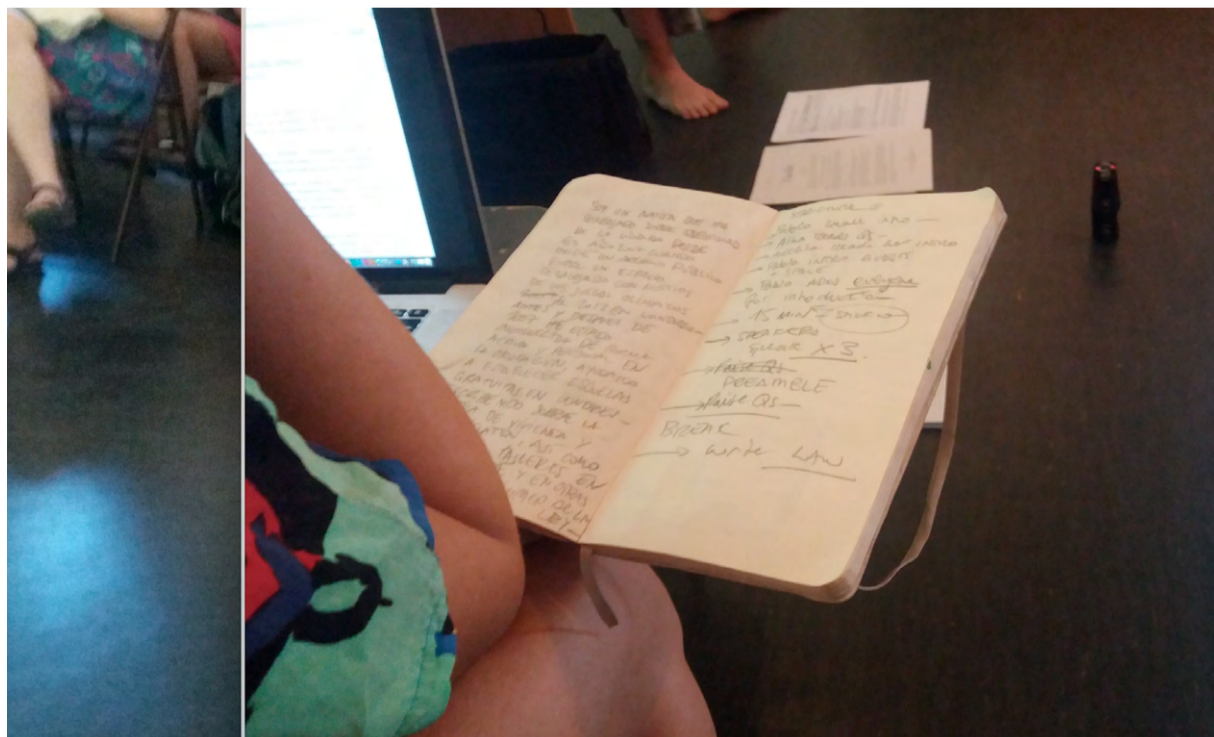
de propiedad medievales se basaban, pues, al inicio, en un principio de reciprocidad ligado al uso y al trabajo y a una red de obligaciones que tanto los Señores como el campesinado debía respetar, aunque desde luego lo habitual era que el campesinado se llevase la peor parte. Se trataba de una “economía de servicios” esenciales, basada en el “derecho de uso” que un Rey concedía sobre parcelas de tierra (*la demesne*) a cambio de grandes porciones de los frutos del trabajo en esas mismas parcelas. Hacia el Siglo XIII, era ya posible legar en herencia pequeñas parcelas (*mansus o hide*)(1) a miembros de la familia (*ibid.*) y, aunque el Rey seguía siendo el “titular”, los campesinos, como clase, tenían un derecho inalienable sobre la tierra, lo cual les otorgaba poder para ejercer presión, rebelarse y, en ocasiones, lograr negarse a nuevos cercamientos de tierras; cercamientos que se harían más habituales en los siglos posteriores(2).

En 1649, los *Diggers* [Cavadores], un grupo de socialistas agrarios protestantes, encabezados por Gerrard Winstanley, empezaron a derribar estos cercamientos en protesta contra un primer intento generalizado de los Señores de privatizar la tierra. El objetivo de Winstanley era devolver a la tierra su estatus inicial: el de propiedad comunal [*commons*](3). Winstanley explicó las acciones de los *Diggers* en la ley que él mismo redactó, la *New Law of Rightousness* [La Nueva Ley de la Justicia], donde proclamó, con el ardor religioso propio de la época:

Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno (4) [...] En el principio de los tiempos, Dios creó la Tierra. Nada fue dicho acerca de que una parte de la humanidad debiera dominar al resto, pero el egoísmo llevó a un hombre a dominar a los demás.

(WINSTANLEY, 1652)

Lo que Winstanley estaba proponiendo era oponerse radicalmente al sistema naciente de cercamientos, haciendo respetar la propiedad comunal a través de una ley que protegiera el uso y lo que, en términos legales, podría considerarse una especie de “comunización”, por medio de la *prescripción adquisitiva*. A pesar de lo combativo que pueda parecer este gesto, la idea de que el uso bastaba en y por sí mismo para establecer la posesión no retrocedió en el ámbito legal en los Estados del Norte de Europa hasta fecha sorprendentemente reciente. En Países Bajos, por ejemplo, el periodo de tiempo necesario para recibir la titularidad de una tierra después de su ocupación (o “uso”) no pasó de 15 a 30 años hasta el cambio de milenio(5). En Inglaterra, aunque el plazo para la prescripción adquisitiva se redujo de 12 a 10 años con la *Land Registration Act* [Ley de Inscripción de la Propiedad de la Tierra] de 2002, los requisitos para adquirir la titularidad se volvieron prácticamente imposibles de cumplir(6).





## II. Pásame esa pala

Podemos ver un ejemplo temprano y señalado de prescripción adquisitiva en el proceso de Burmagim contra Bradshaw (California, 1870), donde ambas partes reclamaban el derecho de posesión de la misma tierra, heredada 100 años antes de diferentes personas: una de ellas, George Treat, estando con vida, había levantado una valla alrededor del terreno y había llevado ganado a pastar sobre su hierba, mientras que la otra persona no. Puesto que se consideraba que el Sr. Treat había “trabajado” el terreno y, por lo tanto, lo había usado, el jurado falló a favor del Sr. Bradshaw (quien había heredado el título del Sr. Treat) en virtud del *uso productivo* que le había dado a la tierra. El Sr. Bradshaw accedió así al derecho de posesión de la parcela que, hasta aquel momento, había ocupado “ilegalmente”. La prescripción adquisitiva otorga así la posibilidad de una transferencia de titularidad si el demandante legítimo (el propietario) no intenta expulsar al okupa u ocupante a través de los tribunales en cierto lapso de tiempo y si el ocupante da a las tierras en cuestión un “uso productivo”, “las cultiva o vive en ellas”. No obstante, la idea de “dar un uso productivo” tiene una evidente carga ideológica: ¿qué significa hacer que una tierra sea productiva? ¿Estamos hablando de un “uso” por *parte de quién?*

El desarrollo de la tenencia de la tierra, la propiedad y la colonización se produjo al unísono, en particular a través de una idea de uso ideológicamente cargada. En la historia del genocidio americano de las poblaciones nativas, el proceso de Johnson contra McIntosh de 1823 constituye un ejemplo significativo al respecto. Citando a Carol Rose, en “La posesión como origen de la propiedad”:

El proceso se refería a la validez de dos reclamaciones diferentes de derecho de propiedad sobre las mismas tierras en lo que hoy en día constituye una amplia franja de Illinois e Indiana. Los demandantes en este proceso presentaban su reclamación a través de tribus indias, basándose en hechos de la década de 1770; los demandados fundaban su defensa en títulos emitidos por Estados Unidos. El Tribunal falló a favor de los demandados, alegando que las reclamaciones realizadas a través de los indios no eran válidas [...]. De acuerdo con uno de los argumentos de los demandados de Estados Unidos, los indios no podían haber transmitido su título de propiedad a los precedesores de los demandantes porque, “[p]or naturaleza”, los propios indios nunca habían llevado a cabo actos sobre las tierras que bastasen para instaurar su propiedad sobre ellas. Es decir, los indios nunca habían acometido realmente esos actos de posesión que dan origen al derecho de propiedad.

Las tribus indígenas, en su nomadismo, no hacían un uso “apropiado” de la tierra, en cualquier caso, la tierra no se utilizaba de acuerdo con los regímenes de propiedad establecidos por la naciente nación estadounidense y, por lo tanto, su uso quedaba invalidado. Para los colonos americanos, el uso “improductivo” de la tierra por parte de las poblaciones indígenas se convirtió en un instrumento para el robo sistemático de tierras en los siglos siguientes.

Agentes principales del modelo liberal-individualista, los colonizadores europeos intentaron imponer, a través de medios burocráticos de legitimación, su régimen de propiedad sobre los colonizados. Al imponer tal régimen (tal es el caso de los británicos en Bengala o de los ingleses tanto en Estados Unidos como en Australia), los colonizadores se deshicieron de las obligaciones y de las responsabilidades mutuas y para con los medios comunes de subsistencia que he descrito con anterioridad. Esto se debe a que la ley consiste en absorber al otro en un sistema que es racional para el colonizador, de manera que, a través de una osmosis violenta, el “otro” se convierte en una copia.

Resalto estos ejemplos como un modo de describir la naturaleza engañosa de la prescripción adquisitiva. El



“uso productivo de la tierra” constituye en realidad un arma de doble filo, en el sentido de que depende fuertemente de las decisiones que se tomen con respecto a qué es la productividad y deja de inmediato fuera todo lo que se considera “improductivo”. Siguiendo esta lógica, la CUS pregunta: ¿es posible reconfigurar esa “productividad” para que refleje de un modo más fiel los comunes, de manera que lo que calificamos de uso “productivo” del espacio se reconfigure en función de criterios radicalmente anticapitalistas?



**MADRID - miércoles 7 Septiembre:**  
**ESKALERA KARAKOLA 19-22.00**  
 Artículo 5: ¿Si se ocupa un espacio vacío, cómo se deciden los usos de ese espacio?  
 Calle de Embajadores, 52 ◆ Lavapiés

**BARCELONA - jueves 15 Septiembre:**  
**LA HIDRA 19-22.00**  
 Artículo 6: ¿Qué tipo de estructuras de ayuda mutua puede garantizar la sostenibilidad de la red?  
 Carrer de Sant Vicenç, 33 ◆ Sant Antoni

**MOSTOLES - sábado 17 Septiembre:**  
**CA2M 11-18.00**  
 REVISIÓN GENERAL: Un día de debates para editar el borrador final del documento  
 Av. Constitución, 23 ◆ Mostoles Central

**Para obtener más información, visite:**  
<http://www.useofspaceconvention.org>  
[www.ca2m.org](http://www.ca2m.org)



Por un uso **común** y **anti-speculativo** del espacio ciudadano:

**Escribiremos la ley del futuro!**

Segunda parte de una serie de encuentros que tendrá lugar en septiembre de 2016 para escribir el capítulo español de la Convención sobre el uso del espacio. La Convención sobre el uso del espacio reclama derechos que en la actualidad no son legales y es un experimento en legislación con perspectiva des movimiento sociales. El primer capítulo de la convención tuvo lugar en los Países Bajos en 2015, las reuniones trabajarán sobre la versión traducida de la convención con el fin de adaptarla al contexto español.

Reconfigurar lo que significa un uso productivo y reestablecer la necesidad del derecho a la prescripción adquisitiva son ambas acciones ligadas siempre a reconfigurar qué “usos” producen “valores” y cómo estos valores existen antes y más allá de su valor de mercado inmediato, también conocido como *valor de cambio*. ¿Es posible que el trabajo afectivo en espacios comunitarios, espacios compartidos, espacios que grupos o minorías que buscan darse una base para existir dentro del capitalismo necesitan conseguir de forma gratuita o por poco dinero, se descriminalice y se reconozca como un trabajo que produce valores sin ningún afán de monetarización? ¿Es posible que se otorgue el derecho a existir a perpetuidad a porciones del espacio urbano, a bolsas de resistencia? ¿Es posible liberar para siempre a aquellos que habitan estos espacios de la amenaza de cárcel y violencia? Estos interrogantes equivalen a preguntar si es posible llegar a eliminar por completo la violencia sistémica sin ocuparse en primer lugar de formas de propiedad que dibujan líneas hereditarias entre aquellos que tienen privilegios monetarizables y aquellos que no los tienen.



### III. Sobre los comunes y la forma valor

Si el valor de uso es realmente un “repositor” del valor de cambio, también conocido como coste en el mercado del producto al venderlo, el valor de uso existe como realidad material en relación a las necesidades sociales, con independencia de la necesidad individual de una persona en particular. El valor de uso de una mercancía es específicamente un valor de uso social, lo cual significa que tiene un valor de uso aceptado en general por otros miembros de la sociedad y no sólo para el productor: la vivienda entra sin duda dentro de esta categoría. Reconociendo que ambos valores existen a la vez en cualquier “espacio” dado, la Convención da prioridad, a través de la protección legal, al valor de uso. Con esta inversión de la prioridad actual del valor de cambio sobre el valor de uso (de lo cuantificable sobre lo incuantificable), la Convención también pretende criminalizar la acción de dejar una vivienda o un espacio sin uso, una realidad que sólo en Inglaterra se traduce en más de 600.000 hogares vacíos(6). Aunque este tipo de legislación ya existe, por ejemplo en el código penal neerlandés, las multas impuestas con frecuencia son ridículas en comparación con el capital que adquieren los propietarios si dejan los espacios vacíos, esperan a que los precios del suelo se pongan por las nubes y luego demuelen los edificios. La CUS va un paso más allá de esta legislación ya existente (que, de acuerdo con los abogados de los okupas locales, casi nunca se aplica) y declara que negar a otros la posibilidad de producir valores de uso social en un espacio debería dar pie a que ese espacio pasara a manos de grupos que no podrían permitírselo a precios de mercado, para que lo gestionaran, lo utilizaran y lo compartieran.

Por supuesto, tratar un “valor acordado socialmente” y los “comunes” como un espacio liso, no jerárquico, sería absurdo. Cualquier invocación de los “comunes” o de “todo el mundo” está desde luego plagada de complejidades. ¿Cómo distinguir las jerarquías inherentes presentes en la noción populista de un conjunto impreciso de individuos? ¿Es necesario, o incluso posible, “legislar” contra la discriminación entre quienes podrían beneficiarse de los “comunes”? No cabe duda de que tanto la prescripción adquisitiva como la noción de los “comunes” son herramientas y no términos que siempre funcionen en sintonía con las reivindicaciones de Winstanley o con los dictámenes de prescripción adquisitiva a favor de quienes no “tienen la propiedad”. De nuevo, ahí es donde la Convención interviene, estableciendo, a través del lenguaje y de la posibilidad de adherirse al documento, un vocabulario común en torno a cómo podrían ser estos “comunes” en concreto. La noción de los comunes presente en la CUS cambia así tanto local como temporalmente, a través de sus redacciones, revisiones y cambios anuales: el documento se transforma de acuerdo con los diferentes debates y conversaciones que los participantes ponen en primer plano en ese lugar y en ese momento específicos. En este sentido, no se trata de un documento fijo, donde, por ejemplo, lo que entra dentro de los comunes para grupos de base en España en 2014 es lo mismo que lo que esto significa para activistas o estudiantes en Francia en 2016, sino que cambia e intenta adaptarse tanto al conjunto cada vez más extenso de legislación en materia de vivienda como a sus luchas.



\*\*\*

1. Esta convención aborda la posición de una multitud de grupos, individuos y prácticas que producen una alternativa a la noción de propiedad, apropiación, explotación acumulativa e individualización en las sociedades contemporáneas; aquí referida como “valor de uso del espacio” y definida en el artículo 3 de esta Convención;

(Artículo 1; párr. 1 – Versión neerlandesa)

\*\*\*

#### IV. Cantar en cabildos cavernosos

Al plantear una reivindicación sobre la tierra, los *Diggers* estaban de hecho cuestionando cómo se distribuían los derechos, formulando la pregunta fundamental (¿a quién le pertenece esto y por qué?) y poniendo en escena o *efectuando* la pregunta a través de la ocupación y del uso de la tierra. Es interesante observar, a este respecto, que el okupa, una figura social clave del paisaje urbano de Europa del Norte a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, no se identificó con el “delincuente” en el código penal de diferentes Estados miembro de la Unión Europea hasta fecha relativamente reciente.

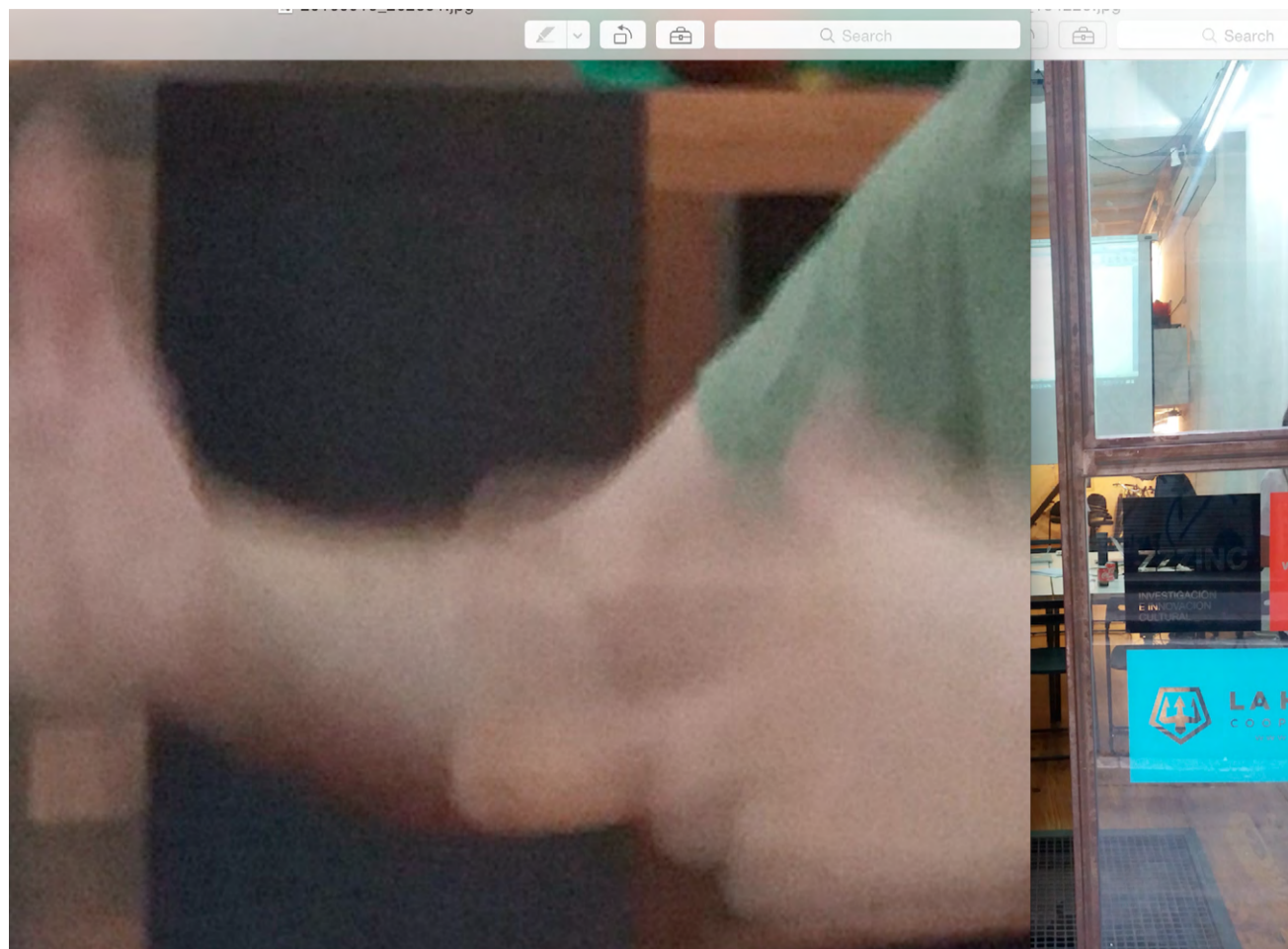
Basándose en una Ley sobre la Paz Doméstica (*huisvrede*) de 1880, Países Bajos introdujo un articulado draconiano contra las okupaciones en 2010. El artículo 138 y los artículos asociados del Código Penal amenazan a los que okupan con una pena de tres años de cárcel y multa, una condena que se triplica si la acción la lleva a cabo un grupo. La ley “*anti-kraak*” [antiokupa], tal y como se la conoce, está dirigida contra un sector específico de la población neerlandesa: pretende reducir y, con el tiempo, eliminar la práctica de la okupación tanto en su capacidad de dar vida, sostener y reproducir simbólicamente espacios anticapitalistas, como en su función material de exención del alquiler dentro del parque de viviendas a precios de mercado. En tanto que práctica que no desea acatar el actual régimen de propiedad ni la política que lo acompaña, en cuanto que práctica que intenta sortear las nociones vigentes de uso y titularidad apropiados, la okupación debe dejar de ser un icono y una opción habitacional para grupos que reclaman el derecho a la ciudad.

En Reino Unido, se aprobó un texto legislativo parecido en 2012. La Sección 144 del Proyecto de Ley sobre Justicia gratuita, Penas y Sanciones (LASPO, por sus siglas en inglés) creó un nuevo delito, a saber, la “okupación de un edificio residencial”, una práctica extendida y tolerada hasta bien entrada la década de 1980 en la Gran Bretaña postindustrial y en crisis. Seis meses después de su entrada en vigor, SQUASH (siglas de Acción Okupa para Hogares seguros, en inglés) declaró que más de 180 personas se habían quedado sin hogar a resultas de esta ley y que otras 33 habían sido acusadas de este delito(8).

A pesar de ello, se siguió okupando, como sucede siempre con prácticas que nacen de una necesidad ante la ley: se okuparon, se abrieron y se desalojaron más espacios tanto en Países Bajos como en Reino Unido. La Convención aborda la persistencia de la okupación ante esta legislación y su puesta en práctica (aunque aún moderada), recalando que la actitud actual del Estado no garantiza una benevolencia a largo plazo. La mera existencia de este poder estatal es relevante no sólo en su materialización presente, sino en su *posibilidad*. La Convención interviene precisamente



contra esta posibilidad, intentando definir, analizar y producir, de manera preventiva, lenguajes en torno al cuidado y a la protección de espacios con un programa ideológico diferente.



\*\*\*

*Para la distribución del espacio conforme a los principios del valor de uso en virtud de la creación y/o protección de los comunes, definidos como aquellos recursos culturales, habitacionales y naturales accesibles a todos los miembros de una sociedad, sostenidos en común, sin discriminación, con independencia de su titularidad, a través de la democracia radical;*

*(Artículo 3; párr. 1 – Versión neerlandesa)*

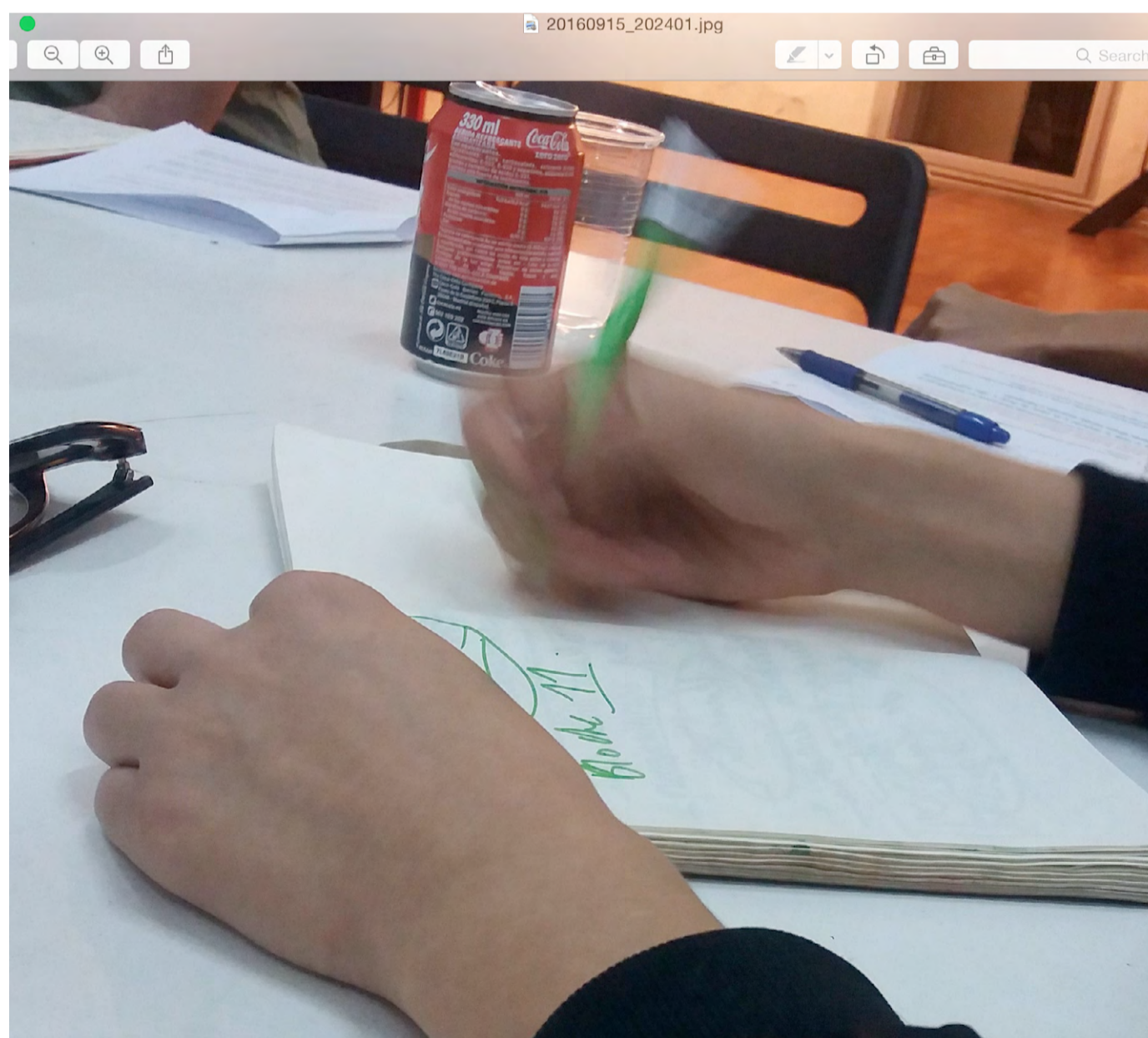
\*\*\*

#### V. Seguir amasando en múltiples direcciones

Queda aún una serie de preguntas complejas sin responder, que pasan a primer plano y que espero poner sobre la mesa con las primeras traducción y redacción de la Convención en España, que comenzará en junio de 2016. La primera pregunta tiene que ver con la funcionalidad de la convención. Aunque el hecho de debatir, redactar y escribir colectivamente tiene sin duda valor en sí mismo (¿de empoderamiento?), la convención no ha traspasado aún en realidad el umbral de un documento “entre dos aguas”. Un documento que se asoma por la ventana de la ley sin llegar a conocer/transmitir su lugar u su uso dentro de tal campo. Cuanto más pienso en ello, más concibo esto como una fortaleza, en el sentido de que logra no someterse ni a una noción artístico-representativa, ni a una legalista-utilitaria, pero, paradójicamente, también lo concibo como su debilidad, puesto que no logra comunicar su propio uso de forma transparente y, por lo tanto, corre el riesgo de que se le dé un mal uso o que no se le dé ningún uso en absoluto.

La propiedad es la red de relaciones que rige la posesión y el derecho civil, administrativo y penal rige esta red, pero, tal y como sostiene Mark Tushnet (miembro del Movimiento de Estudios Legales Críticos estadounidense de la década de 1970), los “derechos” son puro escaparate para legitimar afirmaciones de poder por parte del grupo dominante. Así que, ¿para qué sirve la Ley?

La Convención se ha descrito como una “legislación-movimiento”(9). En una imposibilidad efectiva de definir en términos sencillos qué es el “movimiento”, quién puede participar de él y cuáles son sus dinámicas(10), creo que, de todo lo que cabe extraer de esta definición, lo más útil son sus connotaciones. El profundo compromiso del documento parte del proceso a través del cual se escribió: una serie de encuentros públicos de los que participaron personas que se identificaban con fuerza como gentes con un interés real en la cuestión de la vivienda, en la medida en que vivían amenazadas sin cesar por alquileres elevados y situaciones precarias de vida y/o porque podían arrojar luz sobre formas de resistencia, como es el caso de abogados de cooperativas de vivienda, activistas, okupas y juristas. La pregunta central, no obstante, es ¿por qué legislación?, ¿por qué una ley para ocuparse de espacios que, en muchas ocasiones, rechazan la ley como paradigma de la opresión? Pues, específicamente, para recuperar, reescribir e intentar repensar maneras en las que poder restablecer una política equitativa de justicia habitacional a través de la idea en cierto modo radical de que la propiedad privada, tal y como la conocemos, debería dejar de existir. El tropo de plantear esto como un hecho consumado, utilizando un lenguaje legitimador, constituye el núcleo de su carácter prefigurativo.







\*\*\*

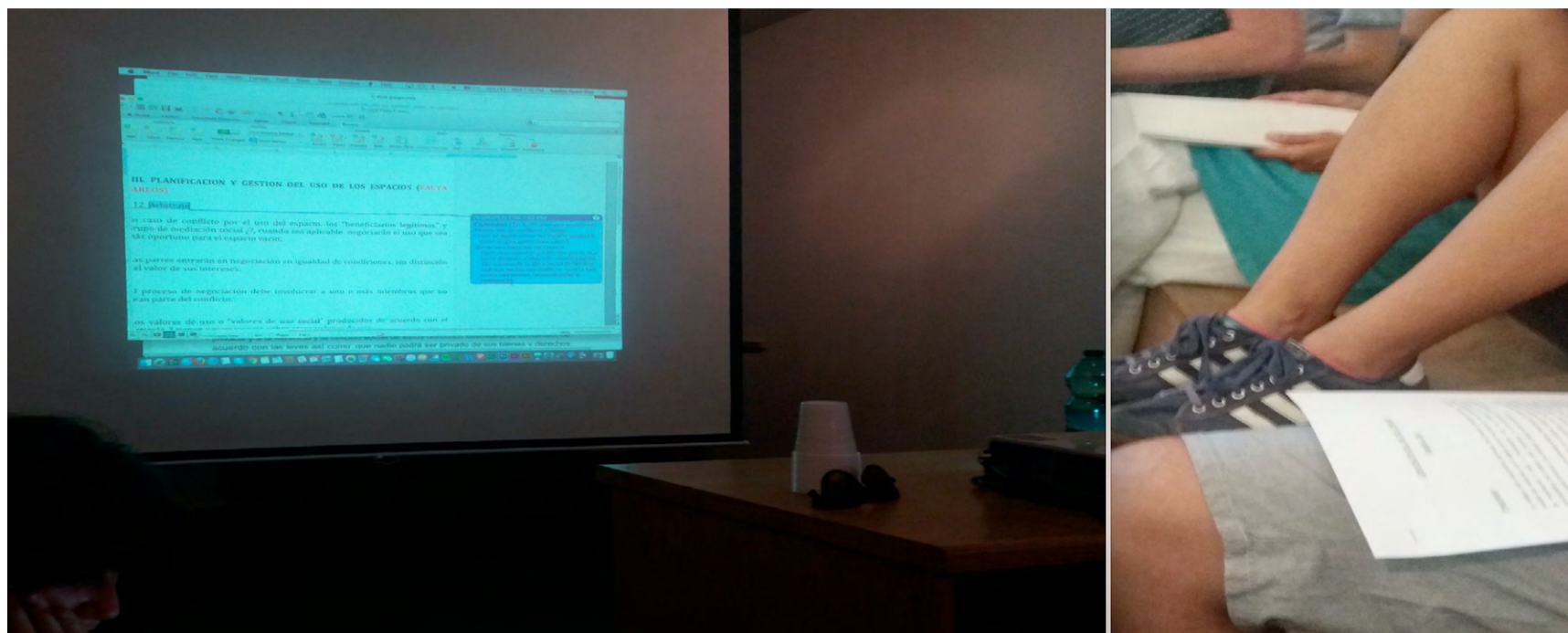
1. *El espacio infrautilizado se define como aquel espacio con menos de 1 persona por 50 metros cuadrados, donde la producción de valor de uso no afecta negativamente a los usos recogidos en el artículo 3, parr. 1, a-j;*

2. *Los espacios que este artículo define como vacíos pueden ser ocupados de acuerdo con el artículo 3, parr. 1, a-j. (Artículo 4; parr. 3,4 – Versión neerlandesa)*

\*\*\*

Si el documento lo aceptan múltiples grupos e individuos que actúan dentro de sus preceptos cambiantes y respetando sus principios, el objetivo último de la CUS es convertirse en una contralegislación frente a la legislación existente en materia de vivienda, que establezca una especie de paralegalidad en Europa. Esto no significa que la CUS aspire necesariamente a que los marcos legales existentes la legitimen. Aunque toma términos y formulaciones para afirmar que sus reivindicaciones en realidad están en parte protegidas por la legislación existente (véase el artículo 7 de la Convención europea sobre Derechos Humanos, por ejemplo, que establece el derecho a la paz doméstica), no intenta utilizar o emplear los métodos actuales de imposición, como la policía, que coinciden con el Estado capitalista heteropatriarcal, sino que afirma estas prácticas de comunización como una necesidad y un hecho a través de la práctica. En este sentido, efectúa una subversión/revocación de los mecanismos de sanción, puesto que el foco se coloca en el Estado (sin “apelar” a él), no en la “ciudadanía”, subordinada de un modo cada vez más violento al Estado capitalista. Aunque las prácticas de lo común que la convención describe (okupación, cuidados colectivos, espacios pedagógicos libres y espacios de salud comunitaria) acontecen, existen y han existido mucho antes de que la noción de los derechos legales a la tierra empezara siquiera a salpicar el paisaje, estas prácticas están en estos momentos a merced de cotas más elevadas de violencia estatal, acompañadas de prácticas bancarias como las que combate la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España, que despojan a quienes no pueden permitirse vivir “dentro de la ley” de sus medios de vida: este es el motivo de que se creara la CUS.

Con el capítulo español, el objetivo y la esperanza es ampliar y criticar en público el borrador neerlandés del documento, a fin de adaptar nuestras herramientas y afilar nuestras armas. Nuestros encuentros iniciales abordaron en parte el ataque brutal de la legislación de vivienda contra las personas hipotecadas (protegidas y representadas con mucha entrega a través de las acciones de la PAH) y las mordazas al uso del espacio público creadas por la “Ley Mordaza” (tales como prisión preventiva, listas negras de “infractores” y aumento del control policial de la vida callejera y de las protestas), erigiendo una bandera de lucha en torno a la protección, definición y gestión colectiva de los “bienes comunes”(11), a través del uso del espacio, dentro de una forma y una estructura que pueda nombrarse, leerse y reivindicarse localmente.



## BIBLIOGRAFÍA

FEDERICI, Silvia (2010). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.

KADIR, Nazima (2016). *The Autonomous Life? Paradoxes of Hierarchy and Authority in the Squatters Movement in Amsterdam*. Manchester: Manchester University Press.

ROSE, Carol M. (1985). “Possession as the Origin of Property”, *University of Chicago Law Review* 52, pp. 73-88.

WINSTANLEY, Gerrard (1652). *La ley de la libertad en una plataforma o la verdadera magistratura restaurada* (trad. 2005). Madrid: Tecnos.

## Notas

1 *Demesne, mansus y hide* eran términos utilizados en el derecho medieval inglés para designar estas parcelas sobre las que los siervos tenían ciertos derechos.

2 Karl Polanyi (fundador de la “escuela sustantivista”) considera los “cercamientos” del Siglo XVIII un “robo de clase” legitimado por abogados y terratenientes, aliados con el parlamento. En particular, el Sistema de Speenhamland



(una enmienda de la Ley de Pobres isabelina), que producía un sistema de pauperismo universal, al permitir que los empleadores pagaran salarios por debajo del nivel de subsistencia que luego las autoridades locales complementaban.

3 En el Reino Unido, aún se conoce la propiedad comunal con el nombre de “the commons”.

4 Versículos 44 y 45 de los *Hechos de los Apóstoles*, capítulo II.

5 Véase <http://www.dutchcivillaw.com/content/legalsystem044.htm>. Consultado el 10/09/2016.

6 Un okupa tiene que ser capaz de demostrar que el propietario de la tierra le hizo creer que era suya o que él creyó equivocadamente que era suya, pensando que formaba parte de su propiedad adyacente: <https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-registered-land/practice-guide-4-adverse-possession-of-registered-land>. Consultado el 07/07/2016.

7 Datos basados en estadísticas gubernamentales, recogidos por la iniciativa *Homes for Empty Homes* en diciembre de 2015.

8 <http://www.squashcampaign.org>. Consultado el 07/07/2016.

9 Un término acuñado inicialmente por Deana Dadusc, crimonóloga y okupa, antes de uno de nuestros encuentros.

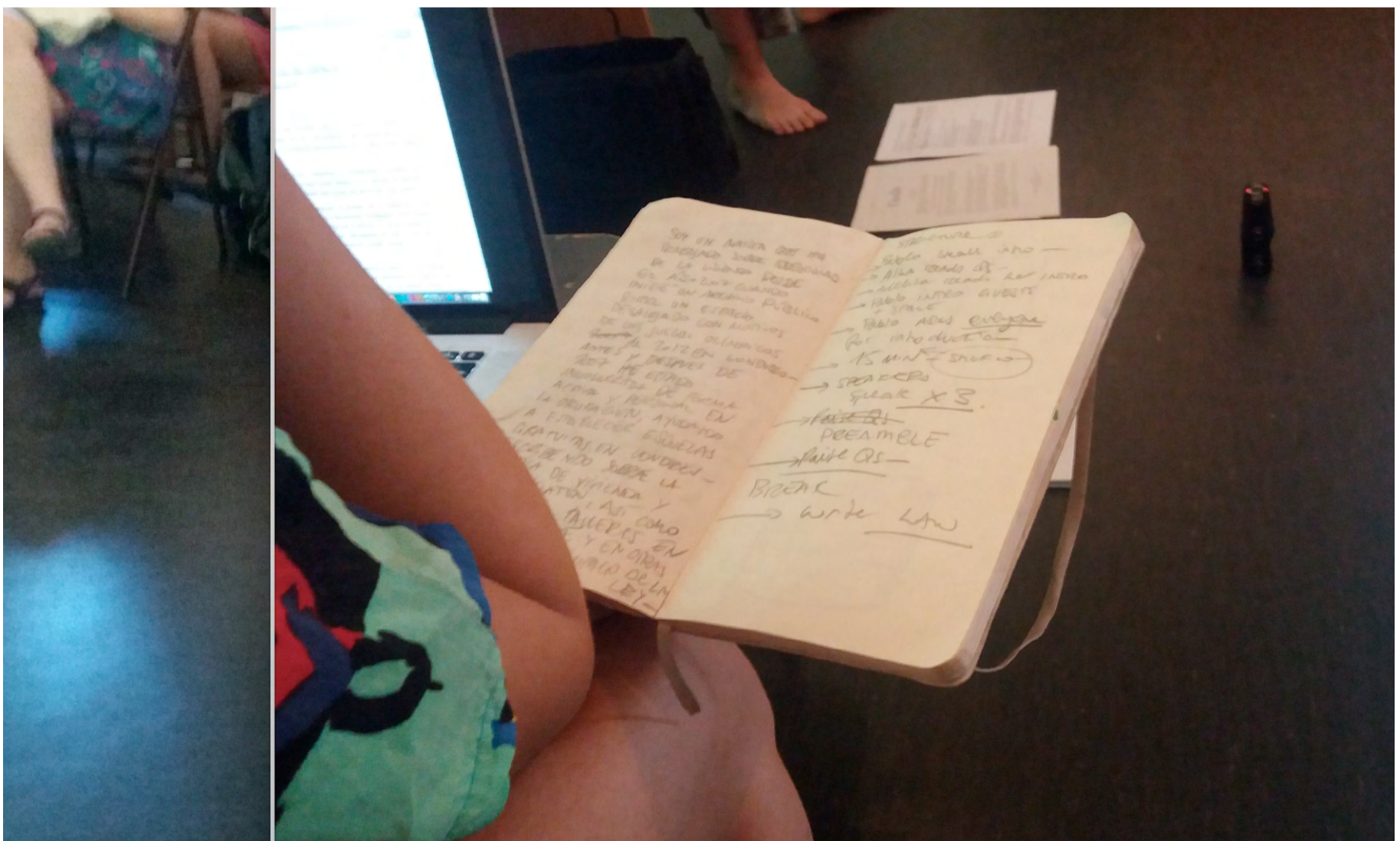
10 Véase el libro siempre debatido “¿La vida autónoma?”, de la antropóloga Nazima Kadir (2016).

11 Tanto “bienes comunes” como “Ley Mordaza” aparecen en castellano en el original [N. de la T.].

FOCUS

ISSN:21173-0040

#SEIS



re-visiones



# Groundwork

Groundwork: thinking thorough the Convention on the Use of Space (just over) a year later.

In May 2014, as part of a commission by the Dutch institution Casco, I began to work on the Convention on the Use of Space (CUS). I say 'I' as an initiator, in an attempt to accept responsibility more than authorship, as the list of co-collaborators and co-conspirators is several pages long. There is a lot to say in terms of the particular methodology used to put the CUS together, as well as the complexities of the CUS being both a functional document and a document produced through an art/ institutional framework; but first I think if I'd never heard of the CUS I'd want to figure out what it is, so I'll start by outlining the paradoxical space the convention inhabits and where it stems from:

The Convention on the Use of Space is a legal document, insofar as it emulates/ steals the language, scope and structure of a legal document and wants to be read as such, but it is not a legal document insofar as it was not produced by a recognized legal entity with formal powers in matters of housing. It was 'collectively' drafted through a series of public meetings held across The Netherlands, by a heterogeneous group of people who debated over the structure, function and language of the articles that compose it, as well as a small number of solicited and paid speakers. The Convention attempts to question and actively introduce new legal regimes around what is currently considered property, and by extension what an owner can do with their property, vis a vis the 'commons'. It is predicated on the idea that property as the 'distribution of social entitlements' must be questioned as a result of the inherently inequitable way in which those entitlements are currently distributed, normalized as varying forms of inherited and acquired privilege. By addressing the space of the commons as an unalienable space that the convention protects its function can be see as a prefigurative tool for negation of the perpetual reproduction of private property.

→ Para-legal?

OF

## I. Rooted owning

Modern private property regimes rise out of the deep intertwining of asset grabbing and it's 'distributor': regulatory land legislation. Ownership and enclosure came into being through ~~forms~~ expanded notions of serfdom around the 5<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> C, when, according to Silvia Federici, rights of use and primordial forms of land regulation were imposed to stem and quell peasant

ISSN: 2173-0040  
FOCUS  
PRODUCE CONCEPT  
OF "PARA-LEGALITY"?

#SEIS

re-visiones

19



AS Federici describes

revolts<sup>1</sup>. The most important aspect of serfdom, from the viewpoint of the changes it introduced in the master-slave relation, is that it gave the serfs direct access to the means of their reproduction. Medieval property relations were initially based on a principle of reciprocity tied to use and labour and a network of obligations that had to be abided to by the Lords as well as the peasantry (although surely the peasantry often had the short end of the stick), as a primordial 'economy of service' based on a King granting a 'right of use' on plots of land (the *demesne*), in return for large portions of the fruits of labor over these very plots. By the 13C small plots (*mansus* or *hide*) could be then handed down through inheritance to family members<sup>2</sup>, and although the King was still the 'title holder', the peasants, as a class, had an inalienable right over the land, which gave them the power to lobby, revolt and at times successfully refuse further enclosures, which became more common in the centuries to come.<sup>3</sup>

enclosures,

In 1649 the Diggers, a group of Protestant agrarian socialists headed by Gerrard Winstanley, began to tear those enclosures down in protest at a first widespread first attempt by the Lords to privatize land. Winstanley's aim was to return land to its previous status: common property<sup>4</sup>. The Digger's actions were explained by Winstanley in his self-written law, the 'New Law of Rightousness', where he proclaimed, with the religious ardor of the time:

*"All who believed were together, and had all things in common<sup>5</sup>; they would sell their possessions and goods and distribute the proceeds to all, as any had need....in the beginning of time God made the earth. Not one word was spoken at the beginning that one branch of mankind should rule over another, but selfish imaginations did set up one man to teach and rule over another"*

What Winstanley was proposing was to radically oppose the nascent system of enclosures by enforcing the commons through a law that protected *use and what would could be seen in legal terms, as a sort of 'commoning' through adverse possession*. While this may appear like a militant gesture the idea that *use* as in and of itself enough to establish possession has only

<sup>1</sup> 'Caliban and the Witch', pg 23, Autonomedia, 2004

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Karl Polanyi (founder of the 'substantivist school') situates the 'enclosures' of the 18<sup>th</sup> Century as 'class-robbery' legitimized by lawyers and landowners in alliance with parliament. In particular the Speenhamland System (an amendment to the Elizabethian Poor Law) that produced a system of universal pauperism allowing employers to pay below subsistence wages which would then be supplemented by the parish.

<sup>4</sup> still known today in the UK as the 'commons'.



Sources →

legally been eroded in northern European states surprisingly recently. In the Netherlands for example, where the time required for the transfer of title after occupation (or 'use') went from a 15 year to a 30 year period only at the break of the millennium. In England, while the term for adverse possession has fallen from 12 to 10 years under the 2002 Land Registration Act the conditions for acquiring the title have become almost impossible to fulfill<sup>6</sup>.

## II. Hand me that spade

An early and notable case of adverse possession can be observed in *Burmagim vs. Bradshaw* (California 1870) where both parties claimed title to the same land, inherited about 100 years prior through different people; one who had, in his lifetime, raised a fence around the land and grazed livestock on it's grass, George Treat and the other who had not. As Mr. Treat was seen as having 'laboured' and thus as having used the land, the jury ruled in favour of Mr. Bradshaw (who had inherited the title form Treat) on the basis that the land had been put to *productive use*. Mr Bradshaw then gained the title for the land that he had until then, 'illegally' occupied. Adverse possession thus grants the possibility of a transfer of title if the rightful claimant (the owner) does not attempt to remove the squatter or occupier though court, within a certain limit of time and the land in question is put to 'productive use', 'farmed or lived on' by the occupier. Yet the notion of 'rendering productive' is obviously ideologically charged, what does rendering land productive mean? Whose 'use' are we talking about? \*

The development of land tenure, property and colonization work in unison specifically through an ideologically charged notion of use. In the history of the American genocide of native populations, the *Johnson vs. McIntosh* case of (1823), is a pointed example of this. Quoting Carol Rose, in 'Possession as the Origin of Property':

"The case concerned the validity of opposing claims to land in what is now a large part of Illinois and Indiana. The plaintiffs in this case claimed through Indian tribes, on the basis of deeds made out in the 1770's; the defendants claimed under titles that came from the United States. The Court found for the defendants, holding that the claims through the Indians were invalid...The Indians, according to an argument of the claimants from the United States, could not have passed title to the opposing side's predecessors because, "[b]y the law of nature," the Indians

<sup>6</sup> A squatter has to be able to prove that they were lead to believe the land was theirs by the landlord or prove they had mistaken it for their land, assuming it was part of their adjacent property.

\* Needs Source



themselves had never done acts on the land sufficient to establish property in it. That is to say, the Indians had never really undertaken those acts of possession that give rise to a property right.”

The indigenous tribes, in their nomadism, did not make ‘proper’ use of land, at any rate the land was not used in accordance to the property regimes established by the nascent United States, and was thus, invalidated. To American settlers, the indigenous populations’ ‘unproductive’ use of land became an instrument of systematic land-grabbing for centuries to come.

Chief agents of liberal-individualist model were the European colonizers who sought, through bureaucratic means of legitimation, to impose their property regime onto the colonized. By imposing such a regime (see the British in Bengal, or the English both the US and Australia) the colonizers did away with the obligations and responsibilities to each other and to the common means of sustenance that I described previously. This is because law is about absorbing the other into a system that is rational to the colonizer, so that via violent osmosis the ‘other’ becomes a copy.

I highlighted these examples as a way to describe the duplicitous nature of adverse possession. A ‘productive use of land’ is in reality a double edged sword, in the sense that it relies heavily on decisions being made about what productivity is, and immediately shuts whatever is perceived as ‘unproductive’ out. Following this logic the CUS asks: could that ‘productivity’ be redrawn to mirror the commons more closely? So that what we deem ‘productive’ use of space gets redraw around radically anti-capitalist lines?

Redrawing what productive use is, and re-establishing the necessity of the claim of adverse possession is invariably tied to redrawing what ‘uses’ produce ‘values’ and how these values exist before and beyond their immediate market value, otherwise known as their *exchange value*. Can affective labor in community spaces, shared space, space needed for cheap or free by groups and minorities carving grounds to exist within Capitalism be decriminalized and legally recognized as producing *values* not for the purpose of monetization? Can percentages of city space, pockets of resistance, be perpetually granted the right to exist? Can those who inhabit them ever be free from the threat of incarceration and violence?

### III. On the commons and the value form

Can systemic violence ever really be broken through appealing to the State? NO.



but what about a squat? its use-value CAN be contested.

If use value is effectively a 'repositor' of exchange value, otherwise known as the market cost of the product when exchanged, use value exists as a material reality vis-a-vis social needs regardless of the individual need of any particular person. The use-value of a commodity is specifically a social use-value, meaning that it has a generally accepted use-value for others in society, and not just for the producer; and housing or space for the commons certainly falls within this category. While acknowledging that both values exist simultaneously in any given 'space', the Convention gives pre-eminence, through legal protection, to use-value, the socially agreed upon value of spaces. Within the inversion of the current preeminence of exchange over use value (of the quantifiable over the unquantifiable) the Convention also seeks to criminalize the act of leaving housing and space unused, which in England alone reaches over 600,000 vacant homes<sup>7</sup>. While this type of legislation already exists, for instance in the Dutch penal code, the fines incurred are often ridiculous compared to the capital acquired by owners in leaving spaces empty and watching land prices levitate to then knock their properties down. The CUS goes a step further than this already existing legislation (which is hardly ever enforced) and states that denying others the possibility of producing social use values within a space should allow for that space to be repossessed, administered, used and shared by marginalized groups/groups who could not afford it at market rate.

• Surely treating a 'socially agreed upon value' and the 'commons' as a non-hierarchical, flat space would be ludicrous. Any claim to the 'commons' or to 'all' is certainly fraught with complexities. How to discern the inherent hierarchies present in the populist notion of a loose body of individuals? Is it necessary, or even possible, to 'legislate' against discrimination amongst those who could benefit from the 'commons'? Certainly both adverse possession and the notion of the 'commons' are tools and not terms that always functioned in unison with Winstanley's claims, or with adverse possession rulings in favor of those who did not 'own'. This is where the Convention acts again, in establishing, through language and the possibility of adherence to the document, a common vocabulary around what this particular 'commons' could look like. The notion of the commons present in the CUS thus changes both locally and temporally, through it's yearly redactions, revisions and changes the document transforms itself along the lines of different debates and conversations participants bring to the fore at that specific time. In this sense it is not a fixed document, where, for example, what the commons includes for grassroots

<sup>7</sup> Data based on Government Statistics, compiled by Homes for Empty Homes in December 2015.

PROBLEMATICS

SOURCE.

"VOICE TO THE VOICELESS" RETHORIC IS CRAP!

+ PLACE

FOCUS

ISSN: 2173-0040

#SEIS

re-visiones

23



groups in Spain in 2014 is the same as what it means for activists or students in France in 2016, but changes and seeks to adapt both to the ever growing body of legislature around housing and its struggles.

\*\*\*

1. *This convention addresses the position of a multitude of groups, individuals and practices that produce an alternative to the notion of property, appropriation, accumulation exploitation and individualisation in contemporary societies; hereby referred to as 'use-value of space' and defined in article 3 of this Convention;*

(Article 1; paragraph 1)

DUTCH  
VERSION -

\*\*\*

LAND  
\* OCCUPATION + USE

IV. Singing into cavernous lobbies

By making a claim on land, the Diggers were effectively questioning how entitlements were distributed; posing the fundamental question: 'who does this belong to, and why?' and enacting, or *performing* the question through squatting. It is interesting to note then, how the squatter, a key social figure in northern European urban landscapes in the late 80s and early 90s, has only relatively recently come to be identified with the 'delinquent' under various EU member states penal and civil codes.

Basing itself on a 1880 House-Peace Act the Netherlands introduced a draconian anti-squatting law in 2010. Law 138 and it's associated acts threaten those who squat with a 3 year jail sentence and fine, which goes up by a third if the action is practiced by a group. The 'anti-kraak law', as it is called, is aimed at hitting a specific sector of the Dutch population, it is aimed at reducing and eventually eliminating the practice of squatting both in it's ability to galvanize, upkeep and materially reproduce anti-capitalist spaces and in it's symbolic function as a possible, rent-free option to the struggles caused by capitalist hetero-patriarcal-normativity. As a practice that does not wish to comply with the current property regime and its concurrent

FOCUS

ISSN:2173-0040

#SEIS

SYMBOLICALLY

MATERIALIY

re-visiones

24



politics, a practice which seeks to circumvent current notions of proper use and title, squatting must cease to be a icon, and housing option for classes claiming the right to the city.

A similar piece of legislation was passed in the UK in 2012. Section 144 of the Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Bill (LASPO) created a new offence, namely that of 'squatting a residential building', a widespread and tolerated practice in post-industrial blighted Britain well into the 1980s. Six months after its implementation, SQUASH (Squatter's Action for Secure Homes), stated that over 180 people had been made homeless as a result and a further 33 charged with the offence. — SOURCE ?!

Yet squatting persisted, as is always the case with practices that are born out of necessity vis a vis the law, more spaces were squatted, opened and evicted both in the Netherlands and in the UK. The Convention addresses the persistence of squatting in the face of legislation, and it's (still mild) enforcement, by highlighting how the current attitude does not signify long term lenience. The mere existence of this state power is significant not in its current actualization but in it's possibility. It is precisely against this possibility that the Convention aims to preemptively define, analyze and produce languages around the care and protection of spaces with a different ideological agenda.

STATES

\*\*\*

*For the distribution of space according to use-value principles in view of creating and/or protecting the commons, defined as the cultural, habitable and natural resources accessible to all members of a society, held in common, without discrimination, irrespective of title, through radical democracy;*

(Article 3; paragraph 1)

\*\*\*

DUTCH  
VERSION

V. Still Kneading in multiple directions

There are still a number of complicated/ unanswered questions which come to the fore and which I am hoping to bring to the table with the first translation and redaction of the Convention in Spain starting June 2016. The first question has to do with the functionality of the

FOCUS

ISSN:2173-0040

#SEIS

re-visiones

25



convention. While the act of debating, redacting and co-writing certainly holds value (empowerment?) in itself the convention has not yet truly breached the space of an 'in-between' document. A document that sits on the fence of law without really knowing/communicating its place or use within that field. The more I think about this the more I view it as a strength in the sense that it escapes to abide to either an artistic/ representational and a legalistic/ utilitarian notion but also paradoxically as its weakness as it fails to speak it's own use transparently and therefore is prone to either misuse or no use at all.

The Convention has been described as a 'movement-legislation'<sup>8</sup>. In an effectual impossibility of easily defining what the 'movement' is, who can take part in, and what its dynamics are<sup>9</sup> I find that the most I can take away from this definition are its connotations. The document's deep engagement stems from the way in which it was written: a series of public meetings featuring those who strongly identify with having an actual stake in the housing question, both as people threatened constantly with high rent and precarious living situations and/or those who can shed light on forms of resistance, such as housing coop lawyers, activists, squatters and jurists. The core question though is 'why legislation?, why a law?' to deal with spaces which in many instances refuse law as a paradigm of oppression? It is specifically to redeem, rewrite and attempt to rethink ways in which equitable politics of housing justice can be re-established through the somewhat absurd (or radical) idea that private property as we know it, should cease to exist. The trope of positing this as a fait accompli, using legitimizing language, is the core of it's prefigurativity.

Property is the network of relationships that govern ownership, and civic, administrative and criminal laws governs this network, but, as Mark Tushnet, (a member of the 1970's American Critical Legal Studies Movement) states, 'rights' are a window dressing to legitimate assertions of power by the dominant. So what good is the Law?

\*\*\*

- 1. Underused space defined as less than 1 person per 50 square meters where use-value production will not negatively impact uses under article 3, paragraph 1, a-j;

<sup>8</sup> a term initially coined by Deana Dadusc, criminologist and squatter, prior to one of our meetings  
<sup>9</sup> See the ever contested book 'The Autonomous Life?' by anthropologist Nazima Kadir.

FOCUS  
Maybe more paragraph?

ISSN 2173-0040  
SEE IT

IT PERSPECTIVE

WHY ABSURD?!

re-visiones



2. Spaces defined as vacant under this article can be subject to occupation under article 3, paragraph 1, a-j.

(Article 4; paragraph 3,4)

\*\*\*

DUTCH VERSION

OUR INITIAL MEETINGS PHENOMENON TRACKED

If the document is accepted by multiple groups and individuals who act within its shifting precepts and 'abide' by its principles, the CUS's ultimate goal is becoming a counter-law to existing legislation on housing, establishing a sort of para-legality in Europe. This does not mean that the CUS will necessarily seek legitimation from existing legal frameworks. While borrowing terms and phrases to assert that its claims are actually partially protected even by existing legislation (see article 7 of the European Convention on Human Rights for example, that establishes a right to house peace), it does not seek to use or utilize current methods of enforcement, such as the police, which are concurrent with the hetero-patriarchal capitalist state, but to assert these commoning practices as a necessity and a given through practice. In this sense it performs a subversion/ reversal of sanctioning, as it is the State and its organs that are written to, and written in (but not 'appealed' to), rather than the 'citizenry' which is increasingly violently subordinated to the capitalist State. While the common practices the convention describes (squatting, collective care, free pedagogical and community health spaces) occur, exist and have existed long before the notion of legal rights to land even began to dot the landscape these practices are currently at the mercy of ever higher levels of state violence in tandem with corrupt banking practices which strip those who cannot afford to live 'within the law' of their livelihood, and it is for this reason that the CUS had come into being.

With the Spanish chapter the aim and hope is to expand and openly critique the Dutch draft of the document, in order to attune our tools and sharpen our weapons. Partially tackling the brutal attack of housing legislation against mortgage holders (painstakingly protected and represented through the actions of the PAH) and the gags on the use of public space established by the 'Ley Mordaza' (such as preventative incarceration, blacklisting 'offenders' and increasing the policing of street life and protest). Our initial 3 meetings speak to these needs, a rallying cry to the protection, definition and common management of los 'bienes comunes' through the use of space, in a shape and form that can be spoken, read and claimed.

FOCUS

ISSN:2173-0040

grand claim - some sources ?!

#SEIS

pre-colonial

here I'm thinking about native practices

re-visiones

27



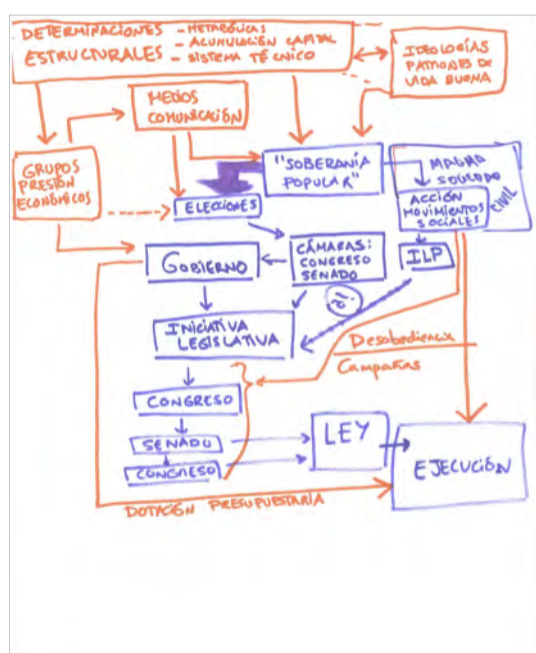
# Los espigadores y yo

Adelita Husni-Bey en conversación con Ana Méndez de Andes y Emilio Santiago Muíño.

Ed. Pablo Martínez <sup>1</sup>

**Adelita Husni-Bey:** Para este capítulo me centré en cómo la ley podría funcionar como un constructo hipotético, específicamente en relación con la vivienda. ¿Qué tipos de acciones ponen en cuestión la propiedad privada? ¿Cómo opera la ley en el territorio de lo simbólico (más allá de la capacidad del Estado de hacerla cumplir) y, por el contrario, cómo el hecho de analizar la ley como un constructo forja una capacidad para deshacer su poder simbólico o reclamarlo. Las “reglas” están en todas partes, pero se codifican específicamente como leyes sólo a través de un consenso que garantiza su aplicación y legitimidad. Entonces, ¿cómo se deshace esa legitimidad o se deshace en un imaginario diferente?

Os he invitado a vosotros dos a participar en esta conversación debido a vuestra amplia experiencia tanto en procesos de redacción de leyes, tanto en aspectos formales como informales. Ambos formáis parte del gobierno de algunos ayuntamientos de distinta forma. Ana eres asesora del Ayuntamiento de Madrid y Emilio trabajas en el de Móstoles, pero ambos tenéis una importante trayectoria en el activismo. Mi primera pregunta, o más bien se trata de un ejercicio, fue pedirlos que dibujarais un diagrama sobre la creación de leyes, a nivel municipal o estatal. ¿Os parece si hablamos a través de él? ¿Quién quiere empezar? Tal vez tú, Emilio, ¿describirías tu diagrama?



**Emilio Santiago Muíño:** Yo he usado dos colores para trazar el diagrama: en azul el esquema de desarrollo de una ley según la Constitución española; en naranja, factores que influyen y que determinan las leyes realmente existentes y su ejecución. En España las iniciativas legislativas pueden tener tres fuentes de origen: el gobierno, las cámaras, -el Congreso o el Senado- o las iniciativas legislativas populares (ILP) que tienen que ir avaladas al menos con 500.000 firmas para ser consideradas por el Parlamento. El proceso se inicia en el Congreso, con toda una serie infinita de trámites, comisiones, enmiendas... Luego pasa por el Senado, que como todo senado, es una cámara de contención diseñada para evitar que los procesos de reforma social vayan muy rápido. Si el Senado da el visto bueno, la propuesta se convierte en ley. Si no lo

da, lo retorna al Congreso y allí se vuelve a debatir, pero entonces ya se puede aprobar por mayoría simple.

Se supone que estas vías derivan siempre de la soberanía popular –ese concepto problemático que he puesto entre comillas en el gráfico–, bien sea por la vía de las elecciones (que elige la cámara que elige el Gobierno), o bien por la acción de los movimientos sociales que pueden desarrollar las ILP. Pero en este esquema hay que introducir una serie de trampas o de variables. La primera y básica es que si el gobierno no dota presupuestariamente la ejecución



de la ley, esta se convierte en papel mojado. Igualmente importante es la influencia que los medios de comunicación ejercen en la conformación de ciertas aspiraciones políticas del cuerpo social. En este sentido, los grupos de presión económicos, aunque no solo ellos, influyen directamente sobre los gobiernos e indirectamente sobre la soberanía popular a través de los medios de comunicación. Incluso intervienen en las elecciones mediante la financiación de los partidos, aunque esto lo he dibujado con una línea discontinua porque se supone que no pasa, pero también ocurre. Con todo, hay que introducir en el esquema otras variables fundamentales: por un lado, la soberanía popular se construye y está condicionada por constelaciones ideológicas que codifican patrones de vida buena y expectativas políticas. A su vez, hay que añadir algo que es clave: las determinaciones estructurales que condicionan el desarrollo de los sistemas sociales. Las sociedades no flotan en el vacío del espacio. Hay unas realidades socioecológicas que determinan el campo de juego. Junto a esta dimensión “metabólica” he dibujado las otras dos determinaciones estructurales constitutivas de la sociedad moderna: la acumulación tautológica de capital y el carácter autorreplicante del sistema técnico. He introducido esto para evitar caer en la personificación del capitalismo, porque el capitalismo no es sólo el programa de unas élites, sino una suerte de dispositivo fetichista, una especie de sonámbulo que tiene ese componente estructural e inconsciente. En lo concreto: el Estado moderno no puede atentar contra la acumulación de capital. Esta es una imposición que viene de nuestras formas profundas de socialización y no del deseo de los capitalistas de enriquecerse. Y una última aclaración: la acción legislativa de los movimientos sociales no se limita a las ILP. A través de la desobediencia de una ley, o bien a través de campañas para forzar su cumplimiento, se puede afectar su ejecución.

**Ana Méndez de Andes:** Me parece un diagrama fantástico. Pero me gustaría introducir un par de cuestiones: la primera es que de tu esquema podría deducirse que la soberanía popular se expresa (más allá de las elecciones) a través de movimientos sociales. Sin embargo hay otros agentes sociales con mucha incidencia que no suponen soberanía popular en el sentido de: “Hay un pueblo que siente de esta manera”, sino que vienen de minorías muy concretas que hacen presión en una...

**Emilio:** ...en una determinada dirección.

**Ana:** Por otra parte, en tu diagrama la relación entre “soberanía popular” y “elecciones” está completamente descompensada en relación a los agentes sociales. En otras palabras, que la línea que dibujas entre la soberanía popular y las elecciones es, en la realidad, mucho más gruesa que la otra.

**Emilio:** Cierto, es mucho más gruesa. (Engorda la línea con el rotulador)

**Ana:** Porque el Estado-nación ha declarado desde... yo qué sé, me sale el Leviatán de Hobbes...

**Emilio:** O mejor desde Locke.

**Ana:** Desde Locke se declara que existe una soberanía popular que puede ser representada en un elemento como el Estado, y esto es una trampa. Todas las elecciones acaban con un líder exclamando “la soberanía popular soy yo”. Por eso, a mí me parecería interesante que se incluyesen expresiones ciudadanas que no están normalmente incluidas cuando nos referimos a los “movimientos sociales. La soberanía popular a menudo se interpreta como una imagen ideal, un espíritu unificado, legible, articulado y capaz de enunciarse, cuando en realidad es un magma conflictivo y en tensión. Y, sin embargo, es muy interesante ver cómo, a pesar de la asimetría y del reduccionismo, la acción de los movimientos sociales es capaz de frenar algunas leyes, como sucedió con la propuesta de la reforma de la ley del aborto. Lo que



quiero decir es que fuera del esquema del procedimiento existen espacios en los que, después de que el Gobierno legisle y en algún momento del proceso de Congreso-Senado-Congreso, la acción social puede producir la retirada de la ley por parte del Gobierno.

**Emilio:** Sí, es verdad, tienes razón. Es una línea que habría que introducir. Totalmente.

**Ana:** Una línea que rompe esa cadena de acontecimientos (señalando el dibujo), porque ejerce cierta presión sobre el Gobierno, porque el Gobierno tiene la potestad de retirar una ley antes de ser aprobada.

**Emilio:** A lo mejor esto de la acción de los movimientos sociales se podría insertar en un cuadrado más amplio. En este magma que llamamos “sociedad civil”, por usar el problemático concepto liberal, entraría todo, desde los forofos del fútbol, a los grupos pro-taurinos, o la ILP de la PAH.

**Ana:** Efectivamente, cosas a la que nunca llamaríamos movimientos sociales pero que están ahí, y hacen sus ILP y se movilizan.

**Emilio:** A nivel genérico sí son movimientos sociales. Otra cosa es que no nos gusten porque hemos capturado el término “movimiento social” para los nuestros, para la izquierda.



**Adelita:** Sí, se ve el modo en que todas estas ramificaciones pertenecen al imaginario de cómo se hace una ley. Empezamos con una idea bastante simple, casi utilitaria, de cómo funciona la ley y terminamos con una multitud de agentes que realmente afectan profundamente su camino. Respecto a ti, Ana, ¿qué dibujaste?

**Ana:** Bueno, pues mi diagrama legislativo es bastante aburrido, muy detallado y además tremendamente lineal. Describe el proceso administrativo de redacción y aprobación de, por ejemplo, un Consejo Sectorial, o una ordenanza. Es importante tener en cuenta que, aunque no está incluido en el esquema, cada uno de estos pasos, aprobaciones o informes está determinado y reglamentado por algún tipo de

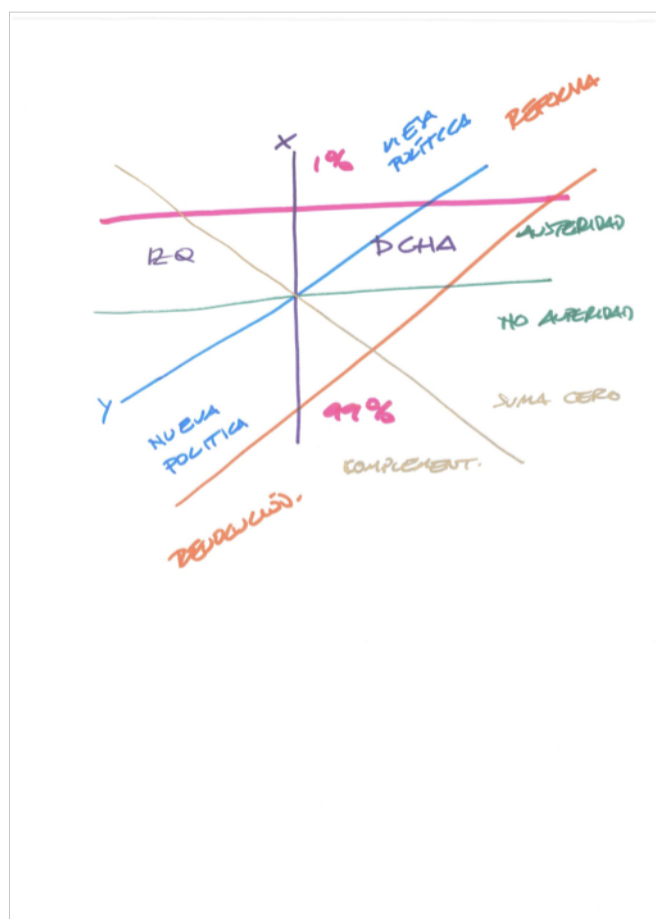
documento superior que establece quién tiene la competencia para hacer la ordenanza, qué tipo de información se debe incluir en las memorias y justificaciones, etc. En este caso en concreto, en principio se redacta un proyecto preliminar que debe ser aprobado por la SGT (Secretaría General Técnica) del área, quien hace un informe jurídico y una propuesta de acuerdo que remite a tres departamentos de los servicios centrales para que emitan sus propios informes. A partir de estos informes se revisa el anteproyecto según las objeciones que hayan puesto y se redacta el proyecto de reglamento, con un acuerdo de inicio que firma la concejala delegada y que se lleva a Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno hace un acuerdo de aprobación y se lo pasa a otra entidad, la ciudadanía, mediante información pública.

En mi diagrama he introducido de motu propio este elemento de “la ciudadanía”, porque nadie en el Ayuntamiento ni en los Reglamentos lo considera. El Reglamento solamente menciona que la aprobación ha de ser pública. A los treinta días naturales de ser publicado en los boletines del Ayuntamiento y la Comunidad, la Secretaría de la Junta de Gobierno hace una memoria de las alegaciones que ha hecho la ciudadanía (esta cosa que no existe para el Ayuntamiento), y se redacta el texto definitivo con el que la Junta de Gobierno hace un Acuerdo de Junta. Si no ha habido alegaciones,

después de los 30 días la Junta de Gobierno aprueba el proyecto y pasa a las “instancias del Pleno”. Estas instancias serían la Comisión Extraordinaria y Permanente, que puede hacer también enmiendas y donde están representados todos los partidos políticos del Pleno. Y luego pasa por el Pleno donde puede haber más enmiendas y donde finalmente se aprobaría.

En todo este proceso hay dos cosas que me parecen especialmente interesantes: primero, la absoluta linealidad. Hay solamente un momento donde pasan cosas a la vez; esto sucede cuando el área de Coordinación Territorial, la Dirección General de Organización y Dirección General de Asesoría Jurídica emiten sus informes. Pero lo hacen cada uno desde su sitio, cuando lo lógico sería que sentarse todos juntos y negociar. Pero la administración tiene una tremenda resistencia a crear espacios de decisión colectiva. Las instituciones públicas del Estado-nación son: jerárquicas, binarias y segmentadoras. Y no solamente en relación con la sociedad, sino también hacia el interior, porque separa y segmenta las competencias, las responsabilidades de firma, la capacidad de tomar decisiones, etc. La otra cosa interesante es que solo se consideran relevantes las propias instancias de la administración. Como explicaba antes, la ciudadanía no existe porque lo que es importante es el acto administrativo de la información pública. Y esto tiene que ver con un tercer aspecto que me parece crucial, y es que nadie dice nada sobre cómo son los procesos: sobre cómo se debería hacer un anteproyecto para que tenga sentido, cómo se debe llevar a cabo la información pública o cómo se tratan las enmiendas. Es decir, a nadie le parece que sea importante, no se hace ninguna descripción de ningún reglamento: nadie tiene en cuenta cuál es el proceso. Los momentos relevantes aquí se refieren a procedimientos administrativos. O sea, el momento en el que la institución dice: “Ok a este texto”. El contenido del texto tiene que cumplir con unas consideraciones mínimas, pero el proceso que te lleva a ese texto no es puesto en ningún momento en cuestión.

**Adelita:** También estoy realmente interesada en la noción de “reforma”. Cómo sucede la reforma dentro y fuera de una institución. ¿Qué tienen estos procesos de diferentes? Porque la reforma dentro de una institución sigue procesos como los que acabamos de describir, racionalizados, jerárquicos, burocráticos. Estos procesos continúan produciendo cambios materiales en la forma en que los ciudadanos y los no ciudadanos –tal y como los define el Estado- viven su experiencia bajo el Estado, pero ¿qué pasa con aquellos procesos que producen reforma, no necesariamente en términos legislativos, sino la reforma como capacidad para alterar?



**Ana:** Puedo responder a tu pregunta a partir de lo que ha pasado recientemente en España y cómo estos acontecimientos han roto el sentido de la dicotomía clásica reforma/revolución. Lo que tiene interesante este ciclo es que cambia los ejes dicotómicos en base a los cuales se juzga la realidad. En política hay normalmente una línea que divide izquierda y derecha, esto que en el Estado español es el bipartidismo PP-PSOE, y de repente el 15M marca otra línea que separa el 1% del 99% (dibuja en el gráfico). Y llega Podemos y plantea que otro eje que divide el campo en vieja y nueva política y está también el eje “Austeridad/No austeridad”. Pero en el gráfico podríamos introducir otro eje que a mí me parece súper interesante –y ya nos metemos en la quinta dimensión (ríen). Este eje separaría la política entendida como un juego de suma cero, donde el campo de poder es el que es y tú ganas poder quitándoselo a otro (que es lo que sucede en el juego electoral, donde ganas votantes restando



votantes a otros), de las estrategias políticas que no entienden que el poder, como capacidad de hacer, sea una suma igual a cero. Por último el eje Reforma/Revolución sería una cosa así (escribe).

Creo que el mejor ejemplo que tenemos de la ruptura reforma/revolución sería la PAH, cuando desarrolla, al mismo tiempo, distintas acciones que rompen esta dicotomía. Por una parte, la PAH hace una ILP y pide la reforma de la Ley Hipotecaria. Pierde la ILP, pero le hubiese gustado que se realizase la reforma. Además, hace desobediencia civil pacífica, que es un gesto más quincemayista. Y además ocupa casas y mete a gente, algo que es...

**Emilio:** Revolucionario.

**Ana:** Revolucionario en el sentido de que acciones como la “Obra Social” desarrollan operaciones ilegales que cuestionan la propiedad privada. Y en todo esto no tiene que elegir entre una cosa y otra: reforma o revolución o viceversa. No es una cuestión de que a aquellos que promueven una ILP, los partidarios de la ocupación les dicen: “¿Pero por qué estáis haciendo la ILP?”. Ni cuando ocupa viviendas, la gente que hace desobediencia civil dice: “¿¡Pa’ dónde vais!?”. Son acciones que se desarrollan a la vez y cada una de ellas sirve para poner en crisis el modo en el cual se entiende todo el ciclo de acumulación de capital y cuál es el papel de la sociedad en ello. Por eso, creo que la cuestión de la oposición reforma/revolución se parece a una crítica que nos hacen mucho nuestras compañeras cuando dicen: “Os estáis centrando en la gestión y no estáis haciendo política”. Pero cuando produces una ordenanza técnicamente no estás siendo revolucionario pero no hay nada más ideológico que una ordenanza.

**Emilio:** Claro.

**Ana:** Una ordenanza define quién tiene acceso a qué, el proceso burocrático, cómo se determina el sujeto de derecho del recurso que se está poniendo a disposición. No hay nada más político que eso. Es decir, la gestión es absolutamente ideológica y política.

**Emilio:** Estoy bastante de acuerdo con esto que comenta Ana, y añadiría: no solo estamos habitando el desdibujamiento de este debate clásico que arrastramos desde la Segunda Internacional, sino que además acumulamos toda una experiencia histórica que certifica que el debate reforma/revolución era falaz. A lo largo del siglo XX no ha habido procesos reformistas que hayan tenido un efecto real sin ampararse en la amenaza complementaria de ejercicios de fuerza que podrían ser categorizados como revolucionarios. Un ejemplo: tú no te puedes explicar el proceso de reforma social en la Europa de posguerra sin la amenaza geopolítica de la URSS. Y al mismo tiempo cualquier proceso revolucionario, incluso los más radicales, por la propia obligación de convivir con un mundo que no se puede impugnar en su totalidad, terminan adoptando un tono que puede ser llamado reformista: una lógica de negociación y concesiones. Entonces, al final revolución/reforma no deja de ser una dicotomía que la práctica ha dejado en desuso.

**Adelita:** En este sentido quería hablar con vosotros sobre algunas investigaciones que realicé en Marinaleda. Me llamó la atención sobre todo la puesta en marcha de un proyecto de autoconstrucción importado de Uruguay, y cómo este plan había reestructurado radicalmente la forma en que los habitantes de Marinaleda tenían acceso a la vivienda pública. De alguna manera, para mí, también produjo un imaginario radicalmente diferente alrededor de la propiedad y el valor de uso, que me gustaría describiros...

Todos los residentes de Marinaleda tienen acceso al sistema de ‘autoconstrucción’, mediante un proceso de selección determinado por ciertos requisitos como pueden ser los bajos ingresos. El solicitante que accede al programa recibe

una parcela de tierra, material de construcción y un grupo de trabajadores asalariados, desde albañiles a arquitectos. Si están dispuestos y tienen la capacidad y el tiempo, se anima a los solicitantes a participar en el proceso de construcción real de su vivienda. Todas las casas tienen una forma y tamaño estándar. La que visité tenía un gran patio trasero, dos dormitorios, un comedor, un salón y dos baños. Estaba habitada por una mujer y su hijo.

Una vez que el trabajo se ha completado, se asigna al solicitante una de las unidades construidas en ese período, lo que significa que la casa en la que trabajó podría no ser la casa que termina habitando. Supongo que esto es para garantizar la calidad en todo el sistema. Una vez asignada una unidad puede ser alterada ligeramente, añadiendo una habitación extra o cambiando las divisiones interiores. El alquiler es de quince euros al mes, dinero que se destina a devolver el material y la mano de obra prestados por el Gobierno regional. La deuda se satisface pronto, después de lo cual pueden dejar la vivienda en herencia a un pariente aunque nunca realmente poseen la propiedad de forma directa. Una vez que la propiedad deja de estar habitada se recicla a través del sistema. Para cuando llegué, en 2014, se habían construido unas 50 viviendas de esta manera.

Los residentes de Marinaleda tienen asambleas generales donde se discuten las asignaciones presupuestarias municipales. Toman decisiones a través de un “senado” compuesto de habitantes. Han optado por no tener una fuerza policial y dirigen cursos municipales que van desde la agricultura hasta la teoría radical queer. En el momento de mi visita había 33 cooperativas funcionando, siendo la mayor y más antigua “El Humoso”, cuyos trabajadores -pertenecientes al Sindicato de Obreros de Campo- ocuparon en 1983 los antiguos terrenos y edificios privados que ahora ocupa la cooperativa. El Humoso practica una política de trabajo para todos que garantiza la mano de obra para los trabajadores cooperativos y los temporeros, todos reciben los mismos salarios de 1.200 euros en temporada alta, muy por encima del promedio nacional para el trabajo agrícola. Por supuesto, Marinaleda es una pequeña ciudad (2800 personas), y no tengo ninguna intención de romantizar o hacer un llamamiento a la reactivación de una utopía rural, colectivista y soviética. Nuestras entrevistas también nos mostraron otras caras del experimento...

Sin embargo, para mí la radicalidad de este imaginario es lo que supone el entrelazamiento de “reforma y revolución” en acción, para encontrar un espacio mutuo la una para la otra, a pesar de los gobiernos conservadores, heteropatriarcales y racistas que rigen los gobiernos nacionales en general. En 2016, cuando inicié el segundo capítulo de la Convención sobre el uso del espacio en España, vosotros participasteis en las reuniones que llevamos a cabo para su escritura. Si bien la Convención es un documento imperfecto, que puede ser visto tanto como una herramienta legislativa radical con la ambición de establecer un sistema para-legal así como un ejercicio de escritura en derecho, trata de cuestionar las nociones de propiedad, comenzando por cuestionar la vivienda como mercancía, y es un intento de reclamar un valor de uso sobre el valor de cambio. Como materialistas firmes que sois [se ríe], ¿cómo interpretasteis este proceso?

**Emilio:** Una de las claves es entender que la realidad bifaz de las mercancías, como algo que tiene valor de uso y valor (cuya expresión es el valor de cambio, pero no se puede equiparar ambos términos), no es un acto jurídico. Es una emanación espontánea de las condiciones civilizatorias capitalistas. Un resultado de su marco de socialización, que no es exactamente un proyecto político diseñado, sino un esquema que configura unos sujetos y los obliga a relacionarse de una determinada manera. Yo creo que esto es interesante verlo a la luz de las experiencias del socialismo real. Entonces, a pesar de tener la voluntad política de superar el capitalismo, y todo el poder del Estado en sus manos, se reprodujeron las categorías sociales básicas de la “abstracción real capitalista” y sus efectos perniciosos: valor, trabajo abstracto, mercancía y dinero. Y es que esas categorías básicas se dan en una escala en la que la política del Estado moderno no sabe ni puede operar. Además aquí hay otro problema de fondo todavía más complejo: el carácter privativo del trabajo, que es lo que al final genera la estructura esquizoide valor-valor de uso, no es un fenómeno que tenga que



ver exclusivamente con la propiedad privada de los medios de producción, como planteaba Marx. Hinkelammert le ha hecho a Marx una crítica que yo creo que es interesante al señalar que ese carácter privativo tiene una causa más básica, que es ontológica y no histórica: “la imposibilidad de la omnisciencia”. La fragmentación de tus percepciones va hacer que en los proceso de coordinación social se impongan estructuras fetichistas e inconscientes, como la que subyace a la mercancía y su doble realidad(2). Por eso, en el socialismo real existían fenómenos de competencia y mercado negro, por tanto valor, aunque oficialmente las empresas fueran entidades que organizaban la división social del trabajo sin competir y supuestamente desde la primacía del valor de uso y la riqueza concreta. Todo esto conduce a la gran pregunta: ¿cómo se coordina el trabajo en sociedades tan complejas? ¿Se puede hacer sin mercados? ¿Se puede hacer con mercados y sin capitalismo? ¿El capitalismo puede funcionar de otra manera?

Porque el argumento antropológico clásico de la existencia de sociedades con mercados y sin acumulación de capital es falaz: eran sociedades radicalmente distintas, donde una gran parte de la supervivencia de la gente estaba vinculada a la autarquía comunitaria y el trabajo de la tierra. Esto no significa que no podamos intentar toda una serie de transformaciones que permitan, dicho de una manera muy simple que la lógica de las necesidades y de la vida concreta, como la necesidad de una casa, se impongan a la lógica de la acumulación de capital. Algo que tampoco es totalmente nuevo: todo el desarrollo de la modernidad se basa esa especie de movimiento ondulatorio: el desarrollo de la mercancía y su lógica y la intervención por parte de la esfera política para corregir el desastre. Estamos en ese juego. Pero no es una especie de péndulo, no es un eterno retorno: la acumulación de problemas y contradicciones dibuja nuevos escenarios. Y hoy tanto por razones ecológicas, como por los límites que encuentra el capital para reproducirse con rentabilidad, ya no podemos fantasear con resucitar los dispositivos reguladores de los gloriosos treinta. Respecto a la cuestión de que “el orden neoliberal ha convertido en sagrada la propiedad privada”, yo creo que el orden neoliberal lo ha exacerbado en relación, sobre todo, al referente de la regulación keynesiana, que hoy sigue hegemonizando nuestro ideal de los “viejos buenos tiempos”. Pero la santificación de la propiedad privada como principio básico ya está en Locke. Está en el fondo de nuestro sustrato civilizatorio. Yo creo que actualmente hay un margen cultural para lograr generar un proyecto de mayorías alrededor de la intervención contra la supuesta autorregulación del mercado, que es a todas luces desastrosa. Es decir, hay posibilidades políticas para un proyecto de corte postneoliberal. Ir más allá de eso es mucho más complicado. La gente puede entender como una obviedad que no debemos permitir, como sociedad, gente sin casas. Pero de ahí a atacar el principio de propiedad privada hay un abismo.

**Ana:** Para mí forma de pensar, el error está en naturalizar la asociación entre derecho de uso y propiedad. Esto es lo primero que me parece discutible, porque conlleva muchos problemas. A mí me gusta mucho el trabajo de Rosa Congost, una historiadora de Girona que tiene un trabajo sobre la transformación del concepto de propiedad del Antiguo Régimen a la Modernidad(3). Ella cuenta cómo el ideal de la propiedad perfecta se construye durante la Revolución Francesa y cómo nuestra idea de la Modernidad y los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad están intrínsecamente ligado al concepto de propiedad absoluta como contraposición al Régimen Antiguo y su superposición de derechos.

**Emilio:** Es que la República se entiende como la cristalización social del principio de propiedad.

**Ana:** Si volvemos a la teoría de los comunes podemos ver las relaciones entre el establecimiento de la propiedad perfecta, cerrada y las formas de segregación del neoliberalismo. El estado neoliberal lo que hace es, cada vez y cada vez más, establecer y limitar cualquier tipo de superposición de derechos y de atribuciones en todas las esferas de la vida. Peter Linebaugh habla de estos derechos y de los comunes cuando refiere “El manifiesto de la Carta Magna” y

su reflejo en la “Carta del Bosque”(4). O lo podemos ver también en la película de Agnès Varda Los espigadores y la espigadora donde se reconoce el derecho de espiguelo, el derecho a recoger los granos de cereal de los campos donde sus dueños no lo hacen. Incluso la Constitución española que reconoce el derecho de propiedad, también su función social. Probablemente, si cuestionas la propiedad privada como tal la gente entra en pánico, pero es bastante más fácil de entender si explicas que las casas que están vacías o las cosas que no son utilizadas por nadie deberían ser usadas por quien las necesita.

El otro día leí la noticia de que del 90% de las obras de intelectuales no se sabe de quiénes son los derechos y aunque quisieras no los podrías retribuir. Esto es muy interesante porque demuestra cómo el capitalismo no consigue extraer plusvalor de absolutamente todas las cosas. No consigue establecer un ciclo de acumulación de capital lo suficientemente intenso –lo consigue aplicar en todas partes, pero no lo suficientemente intenso– en todas las partes y todo el tiempo. Cuando plantea leyes de copyright para todo, en realidad extrae valor de un porcentaje que es mínimo. Y este es otro de los espacios desde donde se puede cuestionar la propiedad en base a su desuso. En Holanda, hasta que cambiaron la ley, si un edificio estaba vacío durante un año se podía ocupar. Es decir, la propiedad privada no se podía dejar sin aprovechamiento social. Aunque probablemente no se debía a un sentido anarquista de la vida sino a un productivismo loco, que decía: “Señores, pongan ustedes a producir”. (Ríen)

**Emilio:** “Que hay cosas sin funcionar”.

**Adelita:** [ríe] Sí, es casi como si con el derecho de uso también se tuviera que incluir el derecho a existir dentro de un espacio pero no necesariamente hacerlo “productivo”.

**Ana:** “Que hay cosas sin funcionar. Pónganlas a producir que si no viene alguien y lo van a ocupar. ¡Venga, dense prisa!”. En todo caso, me parece esencial introducir la idea de que lo que hay que reclamar no es la propiedad, sino la gestión. Los comunes tradicionales (como los de la Carta del Bosque) no se basan en la propiedad.

**Emilio:** Pero yo no olvidaría factores histórico-concretos como el hecho de que esa imposibilidad de generar un ciclo de acumulación de capital suficientemente intenso está promoviendo todos los procesos de privatización que estamos viendo en la actualidad. Ya no es solo una cuestión de reclamar el uso, sino de entender el uso en el marco de un conflicto mucho más amplio y que aún no tenemos muy claro cómo podemos ganar. Si miras con distancia todos estos procesos de cambio que han emergido en los últimos años, lo que da vértigo es el avance imparable de las lógicas de privatización y de acumulación de un capitalismo ahogado, pero que necesita seguir echando leña al fuego del proceso de valorización.

**Ana:** Está muy bien hacer un análisis preciso de todo lo que puede ir mal, pero yo prefiero analizar lo que tiene las cosas de positivo así como detenerme en los ejemplos que ilustran cuándo sí se puede. Volvemos a la PAH: un movimiento que es capaz de convertir en un agente político de primer orden a una gente que no podía pagar una hipoteca y era desahuciada; en un agente social increíble a base a celebrar cada pequeña victoria, diciendo “Ésta la hemos ganado” y demostrando que sí se puede. Esa fuerza de celebrar las victorias, consigue tener una gran incidencia en la producción del sentido social.

**Emilio:** Eso sí que es cierto, pero la experiencia de la PAH de Móstoles también me ha servido para ver algunos límites. En Móstoles debe de haber en torno a 3.000 viviendas vacías, y con todo el trabajo de la PAH se ha conseguido ocupar



un edificio para 18 personas: La Dignidad. Hay veces que creo que todos nos agarramos al clavo ardiente de la PAH, pero el problema de la vivienda en Móstoles, por desgracia, no se va a solucionar con ocupaciones masivas de vivienda, sino a través de una vía legislativa. Que además, a nivel municipal tiene unas posibilidades mínimas. Esto, al final, no deja de ser un pulso con la banca privada en este país. Y eso no se dirime en un Ayuntamiento.

**Ana:** Claro. Yo siempre que cuento esto a continuación digo que la PAH, a día de hoy, ha parado 2.000 desahucios y ha realojado a 2.500 personas. Pero en el mismo periodo se han producido... no se saben bien los números... pero entre 700.000 y 1.000.000 desalojos. Es una experiencia difícil de escalar solo con el activismo, pero de verdad creo –y es un problema histórico– que la melancolía de izquierdas provoca que la gente se pase la mayor parte del tiempo contando lo mal que están las cosas. Volviendo a la idea de revolución y reforma, la increíble potencia de la revolución es que produce la energía y la convicción de que las cosas pueden cambiar, que las cosas se pueden transformar, se pueden cambiar y esto puede ser de otra manera. Esa voluntad es algo básico. Necesitamos normativas, herramientas y capacidad de incidencia en las condiciones materiales de vida para transformarla.

## Notas

1 Extracto de la publicación: *Adelita Husni-Bey. White Paper: On Land, Law and The Imaginary*, Ed. Antonia Alampi, Binna Choi, Jens Maier-Rothe y Pablo Martínez, Publicado por Beirut, Casco-Office for Art, Design and Theory, CA2M Centro de Arte Dos de Mayo y Valiz, 2016.

2 Franz J. Hinkelammert y Henry Mora Jiménez, *Hacia una economía para la vida*, La Habana: Filosofí@/Caminos, 2014. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3318458.pdf> (Vid. 20/11/2016)

3 Rosa Congost, *Campos cerrados, debates abiertos: análisis histórico de la propiedad en Europa (siglos XVI-XIX)*, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2007.

4 “El Manifiesto de la Carta Magna” (1215) que dio lugar a conceptos como habeas corpus, debido proceso legal y la abolición de la tortura, fue acompañado de la apenas conocida “Carta de los bosques” que protegía la subsistencia de los pobres. Peter Linebaugh describe estos documentos citando las fuentes originarias en *El manifiesto de la Carta Magna. Comunes y libertades para el pueblo*, Madrid: Traficantes de sueños, 2013.

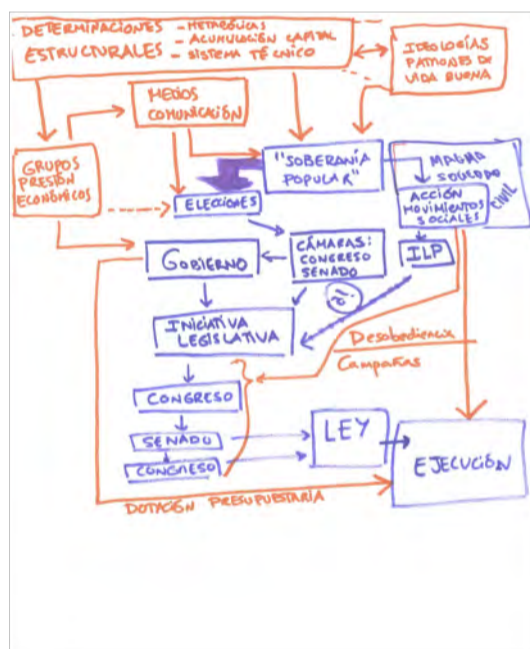
# The Gleaners and I

Adelita Husni-Bey in conversation with Ana Méndez de Andes and Emilio Santiago MuíñoAimaginario

**ADELITA HUSNI-BEY:** For this chapter I looked at how law might function as a hypothetical construct, specifically in relation to housing. What kinds of actions call private property into question? How does law function *symbolically* (beyond the State's capacity to enforce it) and conversely how does analysing law as a construct build a capacity to undo its symbolic power or reclaim it. 'Rules' are everywhere, but they are specifically coded as laws only through a consensus that guarantees their enforcement and legitimacy. So how does that legitimacy get undone or unmade into a different imaginary?

I invited you both to be part of this conversation because of your extensive experience in the formal and informal aspects of law making. You are both part of the municipality in some capacity. Ana you are an advisor to the city council in Madrid and Emilio you are working within the local municipality in Móstoles, but you both come from an activist background.

My first question, but maybe it was more of a little exercise, was to ask you to draw a diagram about law making, at the municipal or State level. Should we talk through it? Who wants to start? Maybe you, Emilio, would you describe your diagram?



**EMILIO SANTIAGO MUÍÑO:** I used two colours in the diagram: blue to outline the development of a law in accordance with the Spanish Constitution, and black for factors that have an influence on and determine how existing laws are implemented. In Spain, formal initiatives for creating new legislation can come from three sources: the government; the houses of parliament—Congress and Senate; or ILPs (popular legislative initiatives), which have to obtain at least half a million signatures to be taken into consideration by parliament. The process starts in Congress, with countless procedures, commissions, amendments... Then has to pass through the Senate, which is, like all senates, an upper 'container' designed to prevent processes of social reform from going through too quickly. If the Senate gives its go-ahead, the

proposal becomes law. If it does not give approval, the law returns to Congress and Congress has to debate again, but it can then pass with a simple majority.

These channels supposedly derive from the sovereignty of the people—a problematic concept which I have put in inverted commas in the diagram—whether by means of elections (choosing the houses of parliament which then form the government), or by means of social movements that can gather momentum behind an ILP. But then you come up against a number of pitfalls or variables that you have to overcome. First and foremost is funding: if the government doesn't set aside enough funding to implement a law, it's not worth the paper it's written on. Equally crucial is the effect of mass media on how certain political aspirations of the social body are con- formed. In this regard, economic pressure groups



impact directly on governments and indirectly—through the mass media they influence—on the sovereignty of the people. They might even interfere in elections by funding certain parties, though I have drawn this with a dotted line because in theory this is not supposed to happen, but in practice it does occur.

Then you'd have to introduce other key variables: the sovereignty of the people is built and conditioned by ideological constellations that encode what I call 'patterns of good living' and political expectations. And then you'd also have to add another critical factor: the structural determinations that condition the development of social systems. Societies do not exist in a vacuum. There are socio-ecological realities that determine the playing field.

Besides this 'metabolic' dimension I have noted two other structural determinations that constitute modern society: the tautological accumulation of capital and the self-replicating quality of the technological system. I have introduced these in order to avoid personifying capitalism, because capitalism is not just a programme deployed by the elite, but a kind of fetishistic device, almost like a sleep-walker, it has an unconscious structural dimension. More specifically, the modern State cannot fight against the accumulation of capital. It is an imposition that emerges from the depths of our forms of socialization and not from the desire of capitalists to accumulate wealth. And one last observation, the legislative action of social movements is not limited to ILPs. You can have an impact on the implementation of a law, by refusing to obey it, or by means of campaigns to stop its enforcement.

**ANA MÉNDEZ DE ANDES:** This diagram looks great to me. But I would like to introduce a couple of issues: the first is that from your diagram one could infer that the sovereignty of the people is expressed (over and above elections) through social movements. There are however other social agents that have a big impact, not necessarily on the sovereignty of the people in the sense of 'the great mass of people who feel this way', but that come from highly specific, concrete minorities, not necessarily movements, and that apply pressure in a...

**EMILIO:** ...a certain direction.

**ANA:** On the other hand, in your diagram the connection between 'sovereignty of the people' and 'elections' outweighs the line leading to social agents entirely. In other words, the line you draw between the sovereignty of the people and elections should be much thicker.

**EMILIO:** True, it should be much thicker. [He thickens the line with the marker.]

**ANA:** Because the Nation-State has declared that ever since... let's see, was it Leviathan by Hobbes...

**EMILIO:** Or maybe since Locke.

**ANA:** Ever since Locke it has claimed that there exists such a thing as the sovereignty of the people, and that it can be represented by an element such as the State—see your thickening of the relationship between elections and sovereignty—and that is misleading. All elections have a tendency to end with a leader exclaiming 'I am the sovereign will of the people!'. That's why I believe it is interesting to include expressions of citizenship that are not usually included whenever we are talking about 'social movements'. The sovereignty of the people is often interpreted as some kind of ideal image, as a unified, legible, coherent and articulate spirit, when it is, in fact, more like a conflictive magma in permanent tension. Having said that, it is very interesting to see how, despite these asymmetries and reductionisms, the action of social movements is able to curb certain laws, like what happened here with the proposed amendment to the law on abortion.(1) What I mean to say is that there are spaces outside the established procedures in which, even

after the government has legislated, in the midst of the Congress-Senate-Congress process, social action can make the government withdraw a law entirely.

**EMILIO:** It's true. You are right. That's a line you'd have to add. Absolutely.

**ANA:** A line that breaks the chain of events as you have described them [pointing to the diagram], because it puts pressure on the government. Because the government has the power to withdraw a law before it is passed.

**EMILIO:** Maybe these actions by social movements could be included within a bigger box. The magma we call 'civil society', to use the problematic liberal concept, could fit in that box and include everything: from football supporters or pro-bull fighting groups to ILPs and groups such as PAH (Platform for People Affected by Mortgages).

**ANA:** That's true, there are pressure groups we would never call 'social movements' but which nevertheless exist, and they do organize ILPs and mobilize people.

**EMILIO:** Generically speaking, yes, they could be part of that box. Another thing altogether is the fact that we don't like them, because we have co-opted the term 'social movement' for ourselves, on the left.

**ADELITA:** Yes, it feels like all of these ramifications pertain to the imaginary of law making. See, we begin with a pretty simple, almost utilitarian idea of how law functions and we end up with a multitude of agents that actually affect its pathway deeply. What about you Ana, what did you draw?



**ANA:** Well, I think my legislation diagram is fairly boring; it's very detailed and it is extremely linear. It describes the administrative process of drawing up and approving, for instance, a Sectorial Council, or an ordinance. It is critical to bear in mind that, although I haven't included them in my diagram, each one of these steps, approvals or reports are guided and regulated by some higher document which determines who has the authority to make the ordinance, what type of information should be included in the reports, justifications, and so forth. In this specific case, firstly, a preliminary project is drawn up, which must be approved by the SGT (Technical Secretary-General) of the specific department in question, who prepares a legal report and a proposed agreement that is then sent to three central services departments for them to draw up their own reports. Based on these three reports the preliminary project is revised to accommodate any objections that may have been raised and then the draft regulation is

prepared, with an initial proposal which is signed by the councillor in charge of that area and it is then brought before the governing board. The governing board then prepares a draft approval and this is brought before another entity, the citizenry, by means of a public announcement.

In my diagram I have included the element of 'citizenry', although it isn't actually contemplated by the city council or its regulations. All that the regulations specify is that there has to be a 'public approval'. Thirty days after being published in the city council's and regional government's official bulletins, the Secretary of the Governing Board prepares a report with any allegations brought forward by this entity (again, the citizenry—absent in the city council's process), and then the



final draft is prepared with which the governing board makes a board agreement. If after thirty days there are no further allegations, the governing board approves the project and then there is an 'official application to the plenary meeting'. These official applications are addressed to the Extraordinary and Permanent Committees, in which all political parties are represented, and they can introduce amendments. The regulation proposal then returns to the plenary meeting where more amendments can be introduced and where it is finally approved.

In this whole process there are two things that strike me as being particularly interesting: the first is its absolute linearity. There is only one moment when more than one step takes place at the same time; that is when the three areas of Territorial Coordination, the Directorate-General of Organization and the Directorate-General of Legal Advice release their reports at the same time. But all three do so from their respective positions, when you would think that the logical thing to do would be to sit down together and negotiate. There is tremendous resistance within public administration to create spaces for collective decision making. The public institutions of the Nation-State are hierarchical, binary and segmenting, and this is true not only with regards to society, but also internally, in the State, because it separates and segments jurisdictions, signing responsibilities, the ability to make decisions, and so on.

The other interesting thing is that only official applications from within the administration itself are taken into consideration as constitutive of the process. As I said earlier, the citizenry does not really exist because the only thing that matters is the administrative action of issuing the public announcement. This has to do with a third aspect which I also believe to be crucial, and that is that nobody says anything about the actual processes: whether there really ought to be a preliminary project for the ordinance to make sense, or how the public announcement should be publicized, or how amendments should be dealt with. In other words, these things don't seem to matter, nobody looks into the workings of regulations: nobody looks at the actual process. The key moments here all refer to administrative procedures. Which is to say, the moment when the institution says 'OK' to the legislative text. The content of the text obviously must fulfil some minimum requirements, but the process that leads to the text is never really questioned.

**ADELITA:** I am also really interested in the notion of 'reform'. As in, how does reform happen within and outside an institution. How are these processes different? Because reform within an institution follows processes such as the ones we've just described, streamlined, hierarchical, bureaucratic. These processes go on to produce material changes in the way citizens and non-citizens—as defined by the State—experience living under the State, but what about those processes that produce reform, not necessarily legislative reform, but reform as in the capacity for alteration?

**ANA:** I can answer your question through what happened in Spain recently. How recent developments and movements broke open the classical opposition between reform and revolution, by changing the dichotomous axes around which reality is judged. Normally, in politics, there is a dividing line between left and right, which in Spain is actualized through the two-party system, PSOE (Spanish Socialist Party) vs PP (Conservative Party), yet suddenly the 15-M movement drew a different line [draws line on diagram] that divided the 1% from the 99%. And then Podemos came along and drew another axis that divided the field into 'new politics' and 'old politics'.<sup>(2)</sup> But we could introduce yet another axis in the diagram, an axis that strikes me as absolutely critical, which throws us into the fifth dimension [laughs]. This axis would separate politics understood as a zero-sum game, in which the field of power is constant and you gain power by taking it away from someone else (which is what happens in the electoral arena, winning votes by taking them from others) from political strategies that do not view power as a zero-sum game. The Reform vs Revolution axis would be something like this [draws].

To me, the best existing example of this, of breaking away from the opposition between reform and revolution is PAH, as it simultaneously carries out different actions that contradict this dichotomy. On the one hand, PAH organized an ILP advocating an overhaul of the Mortgage Law. It lost the ILP, but it would have liked to have pushed through with the reform. On the other hand, it carries out peaceful civil disobedience, which is more of a 15M-type action. It squats

apartments and places people in housing through the anti-eviction campaign 'Obra Social', which is something that is...

**EMILIO:** Revolutionary.

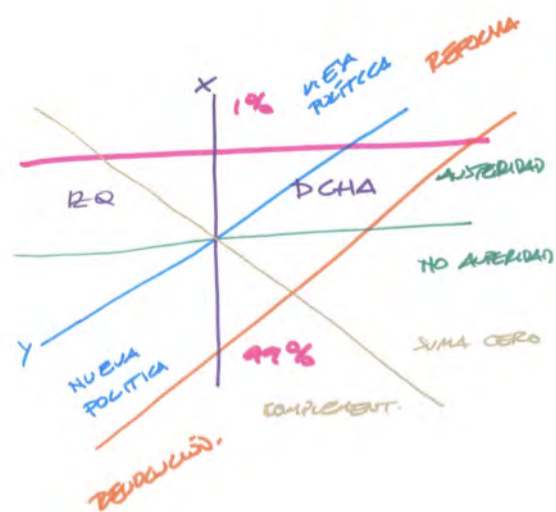
**ANA:** Revolutionary in the sense that initiatives like 'Obra Social' perform illegal acts that question private property.

What this means is that you don't have to opt for one thing over the other, reform over revolution or vice-versa. It is not a question of promoting an ILP and having those who squat going 'Why are you organizing an ILP?' Likewise, when houses are being squatted, those in favour of civil disobedience don't blurt: 'Hey! What the hell are you up to?' They are actions that take place at the same time and each one of them does its bit to bring into crisis the way in which the whole cycle of accumulation of capital is understood and what the role of civil society is with it. For this reason, I believe that focusing on the dichotomy between reform and revolution is more in tune with a critique coming from many of our comrades when they say: 'You are focusing on administration and not politics.' When producing an ordinance, you are not being a 'revolutionary', technically, but there is nothing more ideological than an ordinance.

**EMILIO:** Of course.

**ANA:** An ordinance defines who has access to what, the bureaucratic process, how we determine who has the right to the resources being made available. There is nothing more political than that. In other words, administration is absolutely ideological and political.

**EMILIO:** I'm mostly in agreement with what Ana is saying, but I would add that not only are we witnessing the blurring of this classic debate, that has existed ever since the Second International, but we have accumulated enough historical experience to tell us that the debate is false. Throughout the twentieth century, there have been no reformist processes with real effects that haven't relied on the complementary threat of the exercise of force, which could be classified as revolutionary force. For instance, you can't explain the process of social reform in post-war Europe without the geopolitical threat of the USSR. And, at once, any revolutionary process, even the most radical ones, given the obligation to cohabit a world that it cannot challenge in its entirety, ends up adopting a tone that one could call reformist: saturated with the logic of negotiation and concessions. So, in the end, revolution/reform is ultimately a dichotomy that, in practice, has been overcome.



**ADELITA:** In this sense, I wanted to talk to you about some research I conducted in Marinaleda, a town in Andalucía. I was drawn in particular to the town's implementation of a Uruguayan scheme called 'autoconstrucción' ['self build'], and how this plan, deployed in concert with the regional government, had radically restructured the way Marinaleda's inhabitants had access to public housing. In some ways, for me, it also produced a radically different imaginary around property and use-value, which I'd like to describe...

All residents of Marinaleda have access to the 'autoconstrucción' scheme, with eligibility determined by certain prerequisites such as low income. The successful applicant is offered a plot of land, construction material and a group of waged workers to help, ranging from builders to architects. If they are willing and have the ability and time, applicants are encouraged



to join in the actual building-process. The houses all have a standard shape and size. The one I visited had a large back yard, two bedrooms, a dining room, a lounge and two bathrooms. It was inhabited by a woman and her son.

Once work is complete, the applicant is allocated one of the units built in that period, meaning that the house they worked on might not be the house they end up inhabiting. I suppose this is to ensure quality throughout the system. Once allocated a unit they can slightly alter it, by adding an extra room or changing the interior partitions. Rent is 15 euros a month, which goes to repay the material and workforce deployed by the regional government. The debt is soon met, after which they can pass the housing down to a relative upon death, but never really 'own' the property outright. Once it's vacated the property gets recycled through the system. By the time I had arrived, in 2014, around 50 houses had been built this way.

Marinaleda residents hold general assemblies where municipal budget allocations are discussed. They take decisions through a 'senate' composed of inhabitants and the 'grupo acción' [action group] on a neighbourhood level. They have opted out of having a police force, and run municipal courses that go from farming to radical queer theory. At the time of my visit there were 33 co-operatives operating, the largest and oldest being El Humoso, whose workers—belonging to the Sindicato de Obreros de Campo [Field Workers Union]—in 1983 occupied the former private land and buildings that now house the co-op. El Humoso practices a work-for-all policy which guarantees labour for co-op members and seasonal workers, all receiving the same wage—hitting 1200 euros in high season, well above the national average for farm work. Of course, Marinaleda is a small town (2800 people), and I have no intention of romanticising or calling upon the revival of a soviet style, rural, collectivist utopia. Our interviews also showed us the underbelly of the experiment...

Yet to me the radicality of this imaginary is what throws the intertwining of 'Reform and Revolution' in motion, to find mutual space for each other, despite the conservative, hetero-patriarchal and racist current sweeping national governments at large. Maybe the concrete construction of these imaginaries through the conduit of legislation has become a way to weaponize law.

In 2016, when I took the 'Convention on the Use of Space', from the second chapter of this project, to Spain, you were both part of the meetings that gave rise to the current chapter. While the Convention is an imperfect document, which can both be seen as a radical legislative tool with the ambition to set up a para-legal system or a writing exercise in law, it tried to question notions of property starting with a breakdown of housing as a commodity, and an attempt to reclaim a use value over exchange value. As a staunch materialist [laughs], how did you interpret this process?

**EMILIO:** The key is to understand that a commodity has a use value and a value expressed as an exchange value (though the two terms are not comparable), which is not a 'natural' legal enactment per se. It is a spontaneous emanation from capitalist civil conditions. It is a result of its frame of socialization, which, as I suggested earlier, is not an exact, planned political project, but a pattern that configures subjects and forces them to interrelate in a certain way. I think it would be interesting to view this under the light of the experiences of Real socialism. Here, despite having the political will to overcome capitalism, and with all the power of the State in its hands, the basic social categories of 'real capitalist abstraction' and its pernicious effects were still reproduced: value, abstract work, commodities and money. And this happens because these basic categories are on such a scale that the politics of the modern Nation-State cannot or does not know how to operate without them. In addition, there is another even more complex underlying problem: the exclusive character of work, what ultimately creates the schizoid structure of value and use-value, is not a phenomenon that has to do exclusively with the private ownership of the means of production, as Marx posited. Hinkelammert made a critique of Marx which I believe is germane because it underscores that this exclusive character has a more basic cause, which is ontological and not historical: 'the impossibility of omniscience'.(3) The fragmentation of your perceptions means that, in processes of social coordination, unconscious fetishist structures are imposed, like those that underpin the commodity and its twofold reality. For this reason, even in Real socialism the phenomenas of competition and black

markets persist, and therefore value—though officially its companies were entities which organized the social division of work co-operatively and supposedly from the standpoint of the primacy of wealth or use-value. This brings us to the big question: How can work be coordinated in complex societies? Can it be done without markets? Can it be done with markets and without capitalism? Can capitalism function any other way?

Because the classic anthropological argument of the existence of societies without markets and without accumulation of capital is false: they were radically different societies in which people subsisted largely as a result of community autarchy and working the land. This does not mean that we cannot rehearse a whole series of transformations that, put simply, enable the logic of specific needs like housing to come before the logic of the accumulation of capital—not that this is anything new—the whole development of modernism is based on these kind of wave-like movements: the development of commodities and their logic, followed by the intervention of the political sphere to correct the disaster. We are caught in this game. But it is not a pendulum, it is not an eternal return: the accumulation of problems and contradictions constantly creates new scenarios. And today, both for ecological reasons as well as the limits of capital's capacity to reproduce itself profitably, we can no longer fantasize with the idea of recovering the regulating mechanisms of the glorious thirties. With respect to the idea that the 'neoliberal order has made private ownership sacred', I believe that the neoliberal order has exacerbated it in relation, above all, to Keynesian regulation, which continues to hegemonize our idea of 'the good old times'. But the sanctification of private ownership as a basic principle was already there with Locke. It undergirds our civil substratum. I believe that at the current moment there is a cultural margin in which we can create a project of majorities to intervene against the supposed self-regulation of the market, which is clearly disastrous. What I mean to say is that there are political possibilities for a post-neoliberal project. Going any further is a lot more complicated. People can accept as obvious that we, as a society, cannot allow people to go without housing. But to go from that sentiment to attacking the principle of private ownership is to leap across a huge gap.

**ANA:** To my way of thinking, the mistake lies in accepting the association between the right to use and ownership as natural. This should be the first thing up for discussion, because it is intrinsically problematic. Personally, I really like the work of Rosa Congost, a historian from Girona whose field is the study of the transformation of the concept of ownership from the Ancien Régime to modernism. She relates how the ideal of ownership was built during the French Revolution and how our idea of modernism and the republican values of liberty, equality and fraternity are intrinsically bound to the concept of absolute ownership in comparison to the Ancien Régime and its superimposition of rights.(4)

**EMILIO:** The Republic itself is understood as the social crystallization of the principle of ownership.

**ANA:** If we return to commons theory we will be able to see the relationship between the establishment of perfect ownership and neoliberal forms of segregation, and how what the neoliberal state does is to increasingly fix and restrict any kind of attribution of rights and in all spheres of life. When Peter Linebaugh spoke of the commons in his book *The Magna Carta Manifesto*,(5) and how they were reflected in the 'Charter of the Forest', he was talking about these attributions. Or we can look at Agnès Varda's film *The Gleaners and I*, which deals with the right to glean from fields neglected by their owners. Even the Spanish Constitution recognizes the right to ownership, but it also recognizes its social function. People would probably panic if you were to question private ownership as such, but if you then propose that space which is empty and unused should be used, it becomes a much easier concept to understand.

The other day I read an article that said the authorship of 90% of the work of intellectuals is unknown and, even if you knew the authors, you wouldn't be able to pay them. This is very interesting because it demonstrates how capitalism doesn't manage to extract surplus value from absolutely everything. It doesn't manage to establish a cycle of accumulation of capital that is sufficiently intense, everywhere and at all times—it manages to apply it everywhere, but



not intensely enough. When copyright laws are enacted, in fact, they extract value from a minimum percentage of the total capacity. And this is another of the spaces in which we could question ownership, on the basis of that ownership not being exercised. In Holland, until the law changed, if a building was empty for a year it could be squatted. In other words, private ownership could not be left without a social use. Although probably this was not owing to an anarchist vision of life but to a delirious sense of productivism: ‘Gentlemen, you must produce!’

**EMILIO:** ‘There are things that are not being put to work!’

**ADELITA:** [laughing] Yes, it’s almost as if with a right of use one would also have to include the right to exist within a space but not necessarily render it ‘productive’.

**ANA:** ‘There are things that are not being put to work. Put them to work otherwise someone will come along and take them over. Come on, step to it!’... In any case, I think it is crucial to under- score the idea that what we have to demand is not ownership but management. The traditional commons (like those in the ‘Charter of the Forest’) were not based on ownership.

**EMILIO:** But I wouldn’t overlook historically-specific factors, such as the fact that the impossibility of creating a sufficiently intense cycle of accumulation of capital is driving the processes of privatization we are currently seeing. It is not just a question of demanding use, but of understanding use within a framework of a much wider conflict, one which we still do not have a clear idea how to win. When you look from a distance at all the processes of change which have emerged over recent years in Spain, and at the same time you realize the unstoppable advance of the logics of privatization and the accumulation of capital (which is floundering but still needs to throw more fuel on the fire of the process of increasing value), it makes your head spin.

**ANA:** It’s one thing to draw a precise analysis of everything that can go wrong, but I prefer to analyse the positive aspects and examples that illustrate that it is possible to do something. Let’s return to PAH: a movement that is able to transform people who were unable to pay their mortgage and were evicted into outstanding political agents, into incredible social agents by means of celebrating every little victory, by saying ‘we have won this’ and demonstrating that it is possible. This power of celebrating victories does manage to have an impact and I believe that it has a big impact on the production of social meaning.

**EMILIO:** That’s true, but PAH has its limitations. In Móstoles there must be about 3000 empty housing units, but with all PAH’s work it has only managed to occupy La Dignidad, a building for 18 people. So, there are times when I believe that we cling onto PAH as if we’re clutching at straws. Unfortunately, the housing problem in Móstoles will not be resolved with massive occupations of housing, but by means of legislation. And furthermore, on a municipal level, this currently has very few possibilities of passing. At the end of the day this is a fight against private banks here in Spain. And that cannot be resolved by a town council alone, but must be addressed at a national level.

**ANA:** Of course; I often remind people that, as of the current moment, PAH has stopped 2000 evictions and has rehoused 2500 people. But in the same period of time there have been, I’m not exactly sure of the numbers, somewhere between 700,000 and 1,000,000 evictions. This is a difficult mountain to climb with activism alone, but I truly believe—and this is a historic problem—that the melancholia of the left means that people spend most of the time complaining about how bad everything is. Returning to the idea of revolution and reform, the incredible potential of revolution is that it

produces energy and the conviction that things can change, that things can be transformed, that change can be effected and things can be done differently. This is absolutely crucial. We need regulations, tools, the power and the will to have an impact on the material conditions of life in order to transform it.

## Notes

1. In 2014 the Spanish conservative party (Partido Popular) attempted to reform the law on abortion. Mariano Rajoy, who was president at the time, and had initially supported the reform, was forced to withdraw the proposal due to social pressure and the broad mobilization of civil society. The reform had been drafted by the Minister of Justice rather than by the Minister of Social Affairs and criminalized abortion under any circumstance, rewinding the clock on governmental control over women's bodies to Francisco Franco's military Regime.
2. The left-wing party Podemos was founded in 2014. Building on the popularity of the 15-M movement, it changed the tone of Spanish politics and introduced new vocabulary to the political arena.
3. Franz J. Hinkelammert and Henry Mora Jiménez, *Hacia una economía para la vida* [Towards an economy for life], La Habana: Filosofía@ and Caminos, 2014. See: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3318458.pdf>
4. Rosa Congost, *Campos cerrados, debates abiertos: análisis histórico de la propiedad en Europa (siglos XVI–XIX)* [Closed fields, open debates: Historical analysis and land ownership in Europe (XVI–XIX centuries)], Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2007.
5. 'The Magna Carta Manifesto' (1215) which gave rise to concepts such as the habeas corpus, due process of law, and the abolition of torture was accompanied by a scarcely known 'Charter of the Forest', which protected the subsistence of the poor. Peter Linebaugh describes these documents citing primary sources in the volume *The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2009.